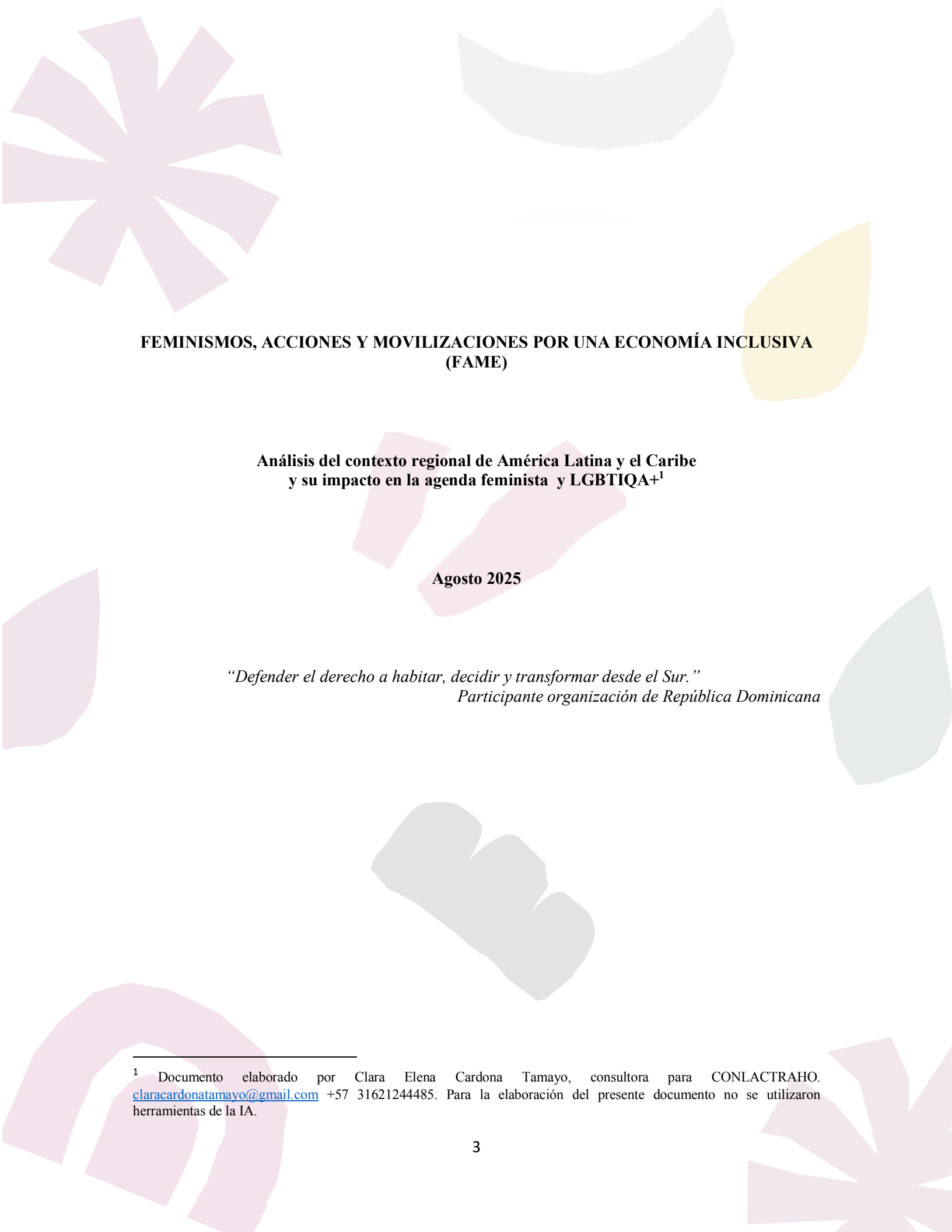






FEMINISMOS, ACCIONES Y MOVILIZACIONES POR UNA ECONOMÍA INCLUSIVA (FAME)

**Análisis del contexto regional de América Latina y el Caribe
y su impacto en la agenda feminista y LGBTIQA+¹**

Agosto 2025

*“Defender el derecho a habitar, decidir y transformar desde el Sur.”
Participante organización de República Dominicana*

¹ Documento elaborado por Clara Elena Cardona Tamayo, consultora para CONLACTRAHO. claracardonatamayo@gmail.com +57 31621244485. Para la elaboración del presente documento no se utilizaron herramientas de la IA.

Tabla de contenido

Introducción	5
El primer contexto: los cuerpos de las mujeres, sus luchas, heridas y esperanzas.....	7
<i>Las luchas, las heridas y las esperanzas de las organizaciones y Redes regionales de FAME</i>	<i>8</i>
.....	9
<i>Los cuerpos y la incidencia política de FAME</i>	<i>11</i>
<i>La incidencia política multinivel para las organizaciones y Redes regionales de FAME.....</i>	<i>13</i>
Elementos fundamentales de la geopolítica global y regional.....	16
<i>El reordenamiento de la geopolítica: armas y cierre de fronteras</i>	<i>16</i>
<i>La geopolítica en América Latina y el Caribe</i>	<i>17</i>
<i>Otras dimensiones de la geopolítica actual</i>	<i>17</i>
<i>La geopolítica, la policrisis/permacrisis</i>	<i>18</i>
El estrategia en la región LAC.....	20
<i>La cruzada anti-género como estrategia de la geopolítica.....</i>	<i>21</i>
El financiamiento para el desarrollo.....	25
La crisis estructural de la cooperación internacional y de las agencias históricamente pilares en LAC..	26
¿Oportunidades en la agenda de financiamiento para el desarrollo?.....	27
Opiniones del contexto que retan el contexto global y regional	28
FAME: una concertación estratégica en tiempos de crisis	32
<i>La agenda de los cuidados: posibilidades y oportunidades.....</i>	<i>32</i>
<i>Obstáculos y oportunidades de la incidencia política feminista de FAME</i>	<i>34</i>
.....	39
<i>Semáforo regional de derechos y cuidados: evidencias para la acción de FAME.....</i>	<i>40</i>

Introducción

El proyecto ***Feminismos, Acciones y Movilización para una Economía Inclusiva*** (en adelante FAME), forma parte de una iniciativa conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) para desarrollar la diplomacia feminista francesa en el marco del Fondo de Apoyo a las Organizaciones Feministas (FSOF). El objetivo de esta iniciativa es reforzar la capacidad de las organizaciones feministas, de mujeres y redes para actuar a largo plazo, garantizar su sostenibilidad y la eficacia de sus acciones. El proyecto incluye el fortalecimiento organizativo y técnico de las organizaciones feministas, de mujeres y redes en función de sus necesidades, la falta de acceso a recursos para el fortalecimiento de las actividades económicas, un acceso más fácil a la financiación y el desarrollo de una red feminista internacional para fomentar el intercambio de buenas prácticas y el refuerzo mutuo de las OSC a través de las fronteras. El proyecto se dirige a 10 países (Marruecos, Benin, Togo, Guinea, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, Ecuador, Bolivia, República Dominicana) y tiene una duración de 4 años.

El proceso en América Latina y el Caribe es implementado por CARE Ecuador y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), principalmente en Bolivia, República Dominicana y Ecuador. En esta región, el proyecto prioriza acciones encaminadas a la justicia económica de las mujeres, considerando la justicia climática, los derechos laborales y los cuidados, como ejes vinculantes mediante tres canales de financiamiento:

Canal 1: Grupos, redes, cooperativas o asociaciones tienen acceso a recursos financieros para desarrollar y fortalecer su actividad económica;

Canal 2: Desarrollo de capacidades y crecimiento organizacional implementados por organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el empoderamiento económico de las mujeres;

Canal 3: Proyectos de acción colectiva e incidencia, como parte de la transición ecológica inclusiva.

FAME en Latinoamérica y el Caribe se implementa a través de las siguientes organizaciones y redes regionales.

Ecuador	● Ciudadanas del Mundo ● Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres – CEOSL ● Corporación Humanas ● Federación de Mujeres de Sucumbíos ● Fundación Las Reinas Pepiadas ● Plataforma de Mujeres Caminando Hacia la Igualdad ● Surkuna
República Dominicana	● Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía - La Ceiba ● Confederación Nacional de Mujeres del Campo ● Tertulia Feminista Sur ● Unísimas- Unidad Sindical de Mujeres Activas - CNUS
Bolivia	● Coordinadora de la Mujer de Bolivia
Redes Regionales	● Centro de Investigación para la Acción Femenina - CIPAF ● Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe - REPEM ● Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe- RSMLAC



El presente documento, tiene como propósito que el Proyecto FAME cuente con un análisis sobre el contexto político en el que mueve sus acciones de incidencia política.

Se construyó a partir de una metodología integral que articuló la revisión de fuentes secundarias de carácter académico, político e investigativo con la escucha activa de los saberes de las organizaciones y redes participantes. Para ello, se desarrollaron talleres presenciales con enfoque socio-afectivo, espacios virtuales de pedagogía de la escucha situada y entrevistas a profundidad que permitieron recoger las experiencias, preocupaciones y apuestas estratégicas de las organizaciones y redes vinculadas al proyecto FAME y de personas expertas en la región de LAC que amablemente han contribuido en parte al contenido de este documento.

Esta combinación de análisis documental y trabajo de campo fortaleció la capacidad de este informe para situar el debate en la complejidad de la coyuntura global y regional, sin perder de vista la perspectiva feminista, de trabajo decente y de derechos humanos que orienta la consultoría.

Al finalizar este proceso, es necesario agradecer de manera especial a todas las personas, mujeres en todas sus diversidades, hombres, colectivos y redes que compartieron sus voces, sus experiencias y sus visiones estratégicas de la resiliencia política de los movimientos sociales en medio de las crisis.

Su generosidad, compromiso y lucidez hicieron posible la elaboración de este documento, que no es solo un insumo técnico, sino también un testimonio colectivo de las resistencias, las esperanzas y la construcción de alternativas.

A cada mujer, a cada red y a cada organización que abrieron sus puertas y sus tiempos, les reconocemos como las verdaderas autoras de este camino político, que se escribe desde la convicción de que otra historia es posible y que la América Latina y El Caribe será toda feminista.



El primer contexto: los cuerpos de las mujeres, sus luchas, heridas y esperanzas

Comenzar este análisis por las *luchas, las heridas y las esperanzas* de las mujeres, sus organizaciones y sus redes, no es un gesto al azar, sino una decisión política y epistemológica, porque el primer territorio de lucha, son los cuerpos, y en nuestra región, los cuerpos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ han sido y siguen siendo el primer mapa político de las censuras, los odios y el control, pero también han sido los territorios de la emancipación y la resistencia. Desde los feminismos comunitarios se ha insistido en que la dupla “*cuerpo-territorio*” es una unidad política de sentido y de luchas y es allí en donde se inscriben la colonización y el despojo, pero también la dignificación de los pueblos y la posibilidad de re-existir y estar en el mundo.

Colocar los cuerpos al inicio del análisis del contexto, significa, por tanto, reordenar el conocimiento y el relato, porque no partimos de las estadísticas para nombrar las mujeres sino desde las huellas que llevan consigo, para comprender, a partir de esa experiencia situada, cómo se reconfiguran las oportunidades y los riesgos en el contexto actual. Esta elección, responde a una ética feminista del análisis que reconoce que las estructuras se vuelven inteligibles cuando se leen en su impacto encarnado y cotidiano, en diálogo con los marcos teóricos y con las evidencias verificables. Así, “*cuerpo-territorio*” se vuelve método y horizonte, fundamento de una política que rehúsa escindir lo íntimo de lo público y que entiende la defensa de los derechos como la defensa de la vida misma².

En este sentido, las epistemologías del Sur³ hacen de la pedagogía de la escucha situada⁴, una clave para recuperar las ecologías de los saberes⁵ de las comunidades, las Redes y las organizaciones. La educación popular heredada de Paulo Freire y reimaginada por las pedagogías feministas y comunitarias, nos liga a una praxis de diálogo horizontal y transformación concreta de las relaciones de poder. Esta combinación (*cuerpo-territorio, ecología de los saberes y la educación popular*), funda el punto de partida de *las luchas, las heridas y las esperanzas* contadas por las protagonistas de FAME, leídas a la luz de los marcos decoloniales y de la evidencia contrastable. A partir de ahí, se delinean las convergencias y las singularidades, y se conecta esta mujergrafía⁶ con el análisis del contexto, usando el lente cuerpo-territorio como eje interpretativo y estratégico y las reflexiones en

² Recuperado en: https://fundaciongrothendieck.org/cuerpo-territorio-la-mirada-de-lorena-cabnal-a-la-lucha-feminista-indigena/?utm_source=chatgpt.com

³ Las epistemologías del Sur son una corriente crítica impulsada por el sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos. Se trata de una propuesta que cuestiona el dominio del pensamiento occidental, eurocéntrico, racionalista y colonial, que históricamente ha deslegitimado los saberes de los pueblos del Sur Global (incluyendo saberes indígenas, campesinos, afrodescendientes, feministas, comunitarios y populares). Las epistemologías del Sur afirman que existen múltiples formas válidas de conocer el mundo, y que solo desde un diálogo de saberes es posible construir justicia cognitiva y social.

⁴ La pedagogía de la escucha es un enfoque desarrollado originalmente por Carla Rinaldi, pedagoga italiana vinculada al proyecto educativo de Reggio Emilia. Este enfoque plantea que escuchar no es una acción pasiva, sino una postura ética y política: significa abrirse a comprender al otro, no solo con la mente sino también con el cuerpo y las emociones. Rinaldi propone que educar implica escuchar lo que las personas tienen para decir (aunque no siempre lo expresen con palabras), reconocer la legitimidad de sus saberes y construir desde allí procesos educativos/formativos y transformadores. En el contexto feminista latinoamericano, esta pedagogía ha sido reinterpretada para generar espacios horizontales de diálogo político, afectivo y situado, especialmente entre mujeres y organizaciones populares. Metodología utilizada en los talleres presenciales y virtuales para la recolección de la información.

⁵ La ecología de saberes busca crear diálogos horizontales entre saberes diversos, visibilizando lo que históricamente ha sido silenciado por el colonialismo del saber

⁶ Se refiere a la cartografía de los cuerpos de las mujeres



los talleres presenciales y virtuales alrededor de las siguientes preguntas: ¿qué luchas sostienen la vida?, ¿dónde duelen?, ¿cómo se sostienen las esperanzas que nos permiten continuar?

Las luchas, las heridas y las esperanzas de las organizaciones y Redes regionales de FAME

El cuerpo colectivo de las mujeres es un territorio que aprende a defenderse mientras crea. Allí donde la vida cotidiana se vuelve frontera, se ha tejido una gramática común. En esa gramática, las luchas no son piezas aisladas, sino hilos de un mismo trama que se reconoce en tres decisiones políticas: *habitar sin miedo, decidir sin permiso y sostener la vida sin ser sacrificadas*.

Habitar sin miedo significa disputar el derecho a estar y a permanecer en los espacios que históricamente se nos han negado. En Ecuador, la defensa del espacio público frente a la violencia administrativa demostró que el trabajo y la ciudad se nombran juntos cuando se intenta expulsar a quienes viven de su trabajo en las calles, no solo se niega un ingreso, se niega una ciudadanía. En República Dominicana, la disputa por el territorio rural, afrodescendiente, juvenil, recuerda que la política nace en la vida cotidiana, en el mercado, en la escuela, en la casa comunal. En Bolivia, habitar sin miedo se traduce en una arquitectura democrática que haga posible la vida, la paridad e interculturalidad, el equilibrio real entre los poderes y una cultura de paz que no sea consigna, sino práctica. Todo ello se sostiene en las Redes regionales que aprendieron a gobernarse sin centro único, porque el cuidado de la vida no puede depender de una sola voz ni de un solo lugar.

Decidir sin permiso ha sido, probablemente, el aprendizaje más claro. La autonomía sobre los cuerpos no es un asunto privado, es una obra colectiva. La insistencia en que la salud sexual y salud reproductiva funcione, con información, servicios reales y sin tutelados, convive con otra exigencia irrenunciable que es el derecho de las personas trans e intersex a vivir sin patologización. El principio es sencillo y profundo, *nada sobre nuestros cuerpos sin nosotras, nada sobre nuestras identidades sin consentimiento*. Esa ética ha ido permeando protocolos, ordenanzas y el trato cotidiano en servicios que, hasta hace poco, eran ajenos o abiertamente hostiles.

Sostener la vida sin ser sacrificadas complejiza el corazón de la economía. Las organizaciones han hecho visible lo que durante décadas fue la negación de los derechos: el cuidado. De allí se desprende una agenda que reconoce el trabajo no remunerado que sostiene los hogares y las comunidades, dentro y fuera del mercado y que reclama, con rigor, seguridad social efectiva, condiciones laborales dignas y presupuestos con enfoque de género. En Ecuador, esta gramática presupuestal ha bajado al detalle local, en República Dominicana, la formación y el emprendimiento juvenil femenino se enlazan con la exigencia de marcos legales y servicios que acompañen, en Bolivia, la redistribución del cuidado entre Estado, comunidad, empresa y familia propone un giro civilizatorio y es que la protección social se organice desde la vida y no desde la excepción.

Una cuarta capa sostiene a las anteriores y es la laicidad democrática como condición de la igualdad. Cuando los dogmas religiosos pretenden dictar el sentido de lo público, los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, pagan el costo. Por eso, en los tres países y en las Redes regionales, luchan para que se mantengan los límites claros entre las creencias de fe y la política.

Lo anterior muestra cómo el feminismo popular ha aprendido a hablar el idioma de las instituciones, del estado y del poder sin dejar los lenguajes de las comunidades y los territorios. *Se escribe presupuesto, pero se habla de comida, se redacta ordenanza, pero se piensa en la plaza, se propone un código, pero se escucha a la comunidad*. Eso explica que la lucha aspira a cambiar a quién decide y cómo lo decide. Allí donde antes solo había destinatarias, hoy hay sujetas que ingresan a los espacios de decisión con formación, con propuestas y en juntanza.

Fotografías 1. Taller socio-afectivo en República Dominicana, junio, 2025.



Nombrar las heridas no es concesión a la derrota, es un método de cuidado y, por tanto, una estrategia política. Las más evidentes son las que cargan los cuerpos de las mujeres y son, la fatiga acumulada, los *dolores que no caben en el informe*, noches que se vuelven días para sostener las agendas y trabajos duplicados para resistir la intermitencia del financiamiento. En Ecuador, varias mujeres describen el agotamiento que produce sostener las movilizaciones y las propuestas con recursos escasos. En República Dominicana, se habla de que la salud está deteriorada, de la necesidad de hacer terapia y del acompañamiento profesional y familiar; en Bolivia se habla de cómo el patriarcado, *duro como una plancha de cemento*, muerde a diario la posibilidad del autocuidado. Nombrarlo no resuelve, pero orienta la política, *sin cuidado, cualquiera de nuestras agendas se deshace*.

Otras heridas son menos visibles y, sin embargo, más corrosivas, son el hostigamiento y la criminalización. En Ecuador, se relató el quiebre del tejido social cuando los fundamentalismos intentaron colonizar el sentido común. *El tejido social se desbarató, se rompió*, y con esa ruptura llegaron las amenazas, las denuncias penales y las traiciones cercanas. Más que el daño jurídico, lo que busca esa estrategia es el desgaste, la duda, la desconfianza. En República Dominicana, varias organizaciones describen el ciclo de un proceso que sube y baja como marea, *tres o seis meses de respiro y otra vez plantones, desgaste, campañas*. El tiempo institucional de la democracia, cuando se usa para demorar, también hiere.

Hay además una herida sutil y es lo que denominan *la asimilación*, que tiene que ver con la manera en que las organizaciones para lograr incidir muchas veces deben *asimilar* las formas, los lenguajes, los protocolos de dichos espacios, y esperar a que el *acomodarse a la incomodidad*, resulte en logros políticos determinantes; en sus palabras esto desgasta y despolitiza.

La vida interna de las organizaciones tampoco está exenta de fisuras. Las diferencias de enfoque, las tensiones por la distribución del trabajo o la competencia por recursos limitados producen fracturas que duelen más porque ocurren entre ellas y sus organizaciones. Pero de esos quiebres han emergido los aprendizajes de la gobernanza para el affidamento, las mediaciones, los tiempos protegidos para el conflicto, los protocolos para el descanso, la redistribución, el acompañamiento psicosocial y la formación en cuidado mutuo. Convertir el cuidado en infraestructura, no en un taller ocasional, es el paso que marca la diferencia entre los procesos que se sostienen y los procesos que se agotan.

Finalmente, hay una intemperie que atraviesa todo el campo y es la incertidumbre de la cooperación y el financiamiento. Proyectos que empiezan y terminan, contratos breves, metas que se mueven según los calendarios externos. En las voces de las Redes regionales se escucha con nitidez que *necesitamos repensarnos para que las Redes no dependa de una coyuntura*, sino que construyen músculo propio. Esa es la tarea que se han dado, a fortalecer la gobernanza, los nodos en diálogo, cuidar la memoria y actualizar el método para que ninguna quede lejos del centro, porque en realidad no hay centro.

Fotografías 2. Taller socio-afectivo en Ecuador, junio, 2025



Las esperanzas no son un lema motivacional, es una técnica política que aprendieron las mujeres en el hacer. Se llama, *el hacer juntas*. Esa esperanza tiene instituciones y rostros y son las casas de acogida, las escuelas de formación, los comités de presupuesto, las clínicas amigas, las cooperativas, las redes de cuidados. Y tiene tiempos y son, saber pausar, evaluar y volver a empezar sin perder el hilo.

En Ecuador, las esperanzas tienen una fórmula que se volvió consigna y método: *lo colectivo no caduca, la organización es la metodología*. También tiene carácter porque en tiempos difíciles hay que transgredir más, unir juventudes y superar los personalismos; y tiene mística, porque se mantiene la ilusión y la utopía, *la fuerza de las mujeres es increíble*. En República Dominicana, la esperanza es tangible, *cada taller donde una joven descubre que su voz es importante*, la felicidad colectiva para las niñas y las mujeres como horizonte de la política, fortalecer los equipos, las alianzas y las vocerías como tarea organizativa. También se nombra la desesperanza frente a los retrocesos legislativos, porque decirla evita romantizar y permite recalcular la ruta sin negar el dolor.

En Bolivia, la consigna es práctica, mantener los foros, fiscalizar los compromisos, cuidar la democracia mientras se cuidan los derechos. La afirmación de que *sin democracia no hay derechos*



funciona aquí como un principio organizador porque no se trata solo de participar, sino de sostener las condiciones para que la participación tenga efectos. Y en las redes regionales, la esperanza es el método de gobierno, porque siempre están pensándose, resignificando y de ese modo han podido sostener sus infraestructuras diversas y están convencidas que si una puerta se cierra, seguro otra se abrirá, porque las estrategias se adaptan al horizonte.

Tal vez el nombre más nítido para las esperanzas que las organizaciones y las Redes regionales de FAME tienen, es la de *permanecer y trabajar juntas*; porque si están unidas será la única fuente real de esperanza, se dijo en Ecuador. Unidad no solo como juntanza, sino como un acuerdo sororo, latente y permanente en donde las diferencias no se vuelvan grietas. En esa clave, las esperanzas también son una política del tiempo que da vitalidad para sostener los procesos largos y ofrece urgencia cuando hay que actuar.

Continuar en la juntanza hace que el cuidado se siga nombrando, se siga expandiendo la lucha por la educación popular que forma liderazgos y no clientelas, defendiendo la laicidad democrática como resguardo de la igualdad, garantizando que la justicia llegue también a quienes sostienen la vida en los márgenes del mercado, y abriendo paso a generaciones que ya no piden permiso para existir. Lo que ayer fue consigna hoy se vuelve política pública, lo que fue dolor se vuelve política de los cuidados, lo que fue una red provisional se vuelve poder social. Esa es la apuesta compartida por las organizaciones y las Redes regionales de FAME.

Los cuerpos y la incidencia política de FAME

La segunda parte de este capítulo, profundiza en la relación entre los cuerpos y la incidencia política a partir de las voces de las organizaciones y las Redes regionales que integran FAME. Es una lectura feminista popular y comunitaria que parte de lo que sienten, piensan y viven las sujetas que sostendrán la incidencia multinivel de FAME. No ordena experiencias como un inventario, sino que teje un relato para responder una pregunta política concreta: *¿cómo están los cuerpos que deberán abrir las puertas, sostener las alianzas, hablar en lo público, negociar con las instituciones, cuidar a las otras y cuidarse a sí mismas?* Estas reflexiones conversan con la mujergrafía de las luchas, las heridas y las esperanzas y lo enraizan en el territorio más inmediato: *la piel, la respiración, las pulsaciones de quienes hacen y harán posible la agenda de incidencia.*

El cuerpo es la primera institución política, allí se abren o se cierran puertas. Cuando las compañeras ecuatorianas dicen que *el cuerpo es una puerta de entrada* para los derechos, nombran la materialidad de la incidencia política que se hace a través de las voces, las miradas, las posturas y la respiración. También dicen que *el cuerpo guarda* y que, en ciertos tramos, la relación con la incidencia se pierde y se vuelve entrega. Esa oscilación entre expresarse y guardar, entre abrirse y cerrarse, *configura la relación entre los cuerpos y la incidencia política regional.*

Hay una política del ánimo que acompaña a la política de la propuesta. En Ecuador se afirma que la incidencia política genera bienestar, que la sostienen el *coraje y la alegría*, y que al mismo tiempo produce *desgaste físico y mental*; que cuando el colectivo dice que sí lo vamos a lograr, el corazón palpita, pero después, cuando se apagan los equipos, aparece la frustración de no alcanzar lo esperado. Esa curva emocional entre el pico de la movilización y el valle de la evaluación de los impactos es el pulso político cotidiano de la incidencia política en todos los niveles.



En República Dominicana, la ecuación se expresa con contundencia, *si el cuerpo no está bien, no podemos hablar ni sentirnos bien con los demás*. También se nombra una sensación colectiva y es que la incidencia política no tiene los efectos que se esperan y esto causa un impacto no solo en los cuerpos, sino en la movilización. En Bolivia, la definición es directa cuando se relaciona el cuerpo como una herramienta para la incidencia política, que expresa resistencia y dolor y que se convierte en un método para lograr la incidencia política. En el plano regional, las Redes regionales describen que el cuerpo se vuelve un campo de disputa entre la exigencia de la incidencia, la necesidad de implementarla y el desgaste que genera en los cuerpos, *pero que no se atienden con el mismo empeño con el que se hace la incidencia política*.

Con lo anterior, queda la claridad que la *relación cuerpos-incidencia política es intrínseca* y permanente, que tiene un desequilibrio en el cuidado y la atención, porque es la incidencia a la que las organizaciones y las Redes regionales ponen mayor esfuerzo y al autocuidado mucho menor. Este desequilibrio se materializa en síntomas que principalmente tienen que ver con el miedo. En Bolivia, localizan el miedo en el pecho, como peso y como presión que se cuela en el tono de la voz. La persecución política, los juicios, los ataques en redes, la difusión maliciosa de comentarios, instala una vigilancia que tensa la garganta y acelera la respiración. Se identifican el temblor de las voces y el silencio como señales de alerta, porque el cuerpo avisa cuando la correlación de fuerzas se vuelve adversa y, al mismo tiempo, recuerda que la incidencia es importante, pero que nos pone en riesgo permanente.

En las Redes regionales, se ubica el miedo en la cabeza, síntomas como migrañas, dificultad para dormir, cansancio constante, pensamientos sobrecargados por sostener los procesos, el desfinanciamiento, los hostigamientos, etc. La preocupación por la seguridad personal y colectiva no es abstracta, se siente en la presión arterial, en la espalda rígida y en los hombros tensionados. En Ecuador, el miedo aparece como gastritis posterior a las fechas simbólicas como el 25 de noviembre y esto no es casualidad porque en el activismo de las mujeres, el calendario dicta la intensidad y los cuerpos reciben el impacto del sobreesfuerzo.

Y es que al preguntar, *¿cómo preparamos los cuerpos para la incidencia política?*, las respuestas son claras y rápidas: *“nos preparamos protegiéndonos entre nosotras, descansando, sosteniendo las rutinas para comer a tiempo y dormir ocho horas, poniendo límites en los tiempos laborales, despejando la mente con otras actividades y nivelando la ansiedad”*; pero con la rapidez de las respuestas viene la rapidez del contraste con los síntomas y el miedo, y ahí, surgen otras reflexiones sobre que *“nos preparamos políticamente, pero no corporalmente”*. Se cuida la ropa y el bloqueador, se memoriza un pronunciamiento durante un mes sin dormir, pero no siempre se garantizan el descanso y la alimentación. Hay cuerpos que se bloquean, que se enferman, que sienten rabia sin permiso para expresarla y hay cuerpos que resisten sin llorar a costa de posponer lo que sienten. Es unánime entre las organizaciones y las Redes regionales que hay poco tiempo para prepararse corporalmente y ese reconocimiento concluye que si se quiere una incidencia política con mayores impactos, es necesario preparar los cuerpos para implementarla.

El carácter individual de la relación entre los cuerpos como motor-instrumento de la incidencia política, abre la puerta para el contraste con el carácter colectivo de la misma, porque en las palabras de las organizaciones y las Redes regionales de FAME, las alianzas no son un acuerdo abstracto, sino que también se siente en los cuerpos, especialmente en la espalda como *una protección que cuida*, en el pecho, como un *calor que acompaña* y en las *manos cuando se juntan* con otras para seguir. Pero también se reconoce la doble faz, porque hay alianzas que suman y otras que restan, por lo tanto, la política del vínculo, entonces, también necesita cuidado.



Los cuerpos que harán posible la incidencia feminista multinivel, llegan con historia, con cicatrices, con aprendizajes. Llegan con alegría y con cansancio, con miedo en el pecho y migrañas en la frente, con euforia cuando la acción conecta con el sentido y con insomnio cuando la exposición excede la protección. Llegan, sobre todo, con una certeza compartida y es que la organización es la metodología. Las luchas, las heridas, las esperanzas y la relación entre los cuerpos y la incidencia ponen el pulso subjetivo de la intervención política de FAME que debe hacer la diferencia entre una agenda que desgasta y una agenda que construya y fortalezca lo colectivo desde el sujeto femenino.

La incidencia política multinivel para las organizaciones y Redes regionales de FAME

La incidencia política feminista multinivel que aquí se perfila no se limita a una escalera vertical de ámbitos (local, nacional, regional), ni a una enumeración de escenarios institucionales. Es, ante todo, una ecología de prácticas que enlaza la reproducción de la vida cotidiana con la disputa de los sentidos en el espacio público, la construcción paciente de las alianzas horizontales con la presión estratégica ante los poderes que oscilan entre la indiferencia y el franco antagonismo, la pedagogía política y la producción de conocimiento con el litigio, la comunicación estratégica y el monitoreo a las políticas públicas, el cuidado colectivo y la protección con la movilización y la negociación.

A diferencia de los esquemas clásicos, el concepto *multinivel* que emerge de las voces del FAME opera como un circuito y no como una pirámide que se escala desde la experiencia barrial hasta lo regional, desde un enfoque interseccional que obliga a reordenar las prioridades y las tácticas y de esta manera, fortalece los objetivos, el lenguaje y los ritmos que la incidencia política requiere.

En Ecuador, las organizaciones describen un tránsito acelerado hacia un proyecto político antidemocrático y excluyente, con impactos que se sienten simultáneamente en el tejido del movimiento y en la vida cotidiana. La desarticulación que denuncian convive con una precarización extendida que empuja a muchas a sobrevivir en contextos fronterizos y urbanos atravesados por las economías criminales y las violencias de alto impacto.

La retirada de muchos cooperantes, sumada al desmontaje o absorción de algunos mecanismos institucionales para las mujeres, se traduce en una sensación de “*pedir permiso para decir género*”, en palabras de las mujeres que han visto cómo el discurso anti-derechos abandera una ofensiva simbólica y material. En ciudades como Manta, donde el accionar del crimen organizado se ha vuelto pauta del cotidiano, la primera tarea de incidencia política es crear condiciones mínimas para trabajar sin exponer la vida, proteger los liderazgos, resguardar y matizar las comunicaciones y modular la visibilidad. Los liderazgos territoriales describen un crimen organizado que opera de arriba hacia abajo y denuncian allanamientos y entradas arbitrarias a viviendas por parte de la fuerza pública, hechos que reubican la seguridad en el centro de la incidencia.

Esa reinención exige una semántica política capaz de disputar los sentidos de la incidencia política feminista en tiempos de auge de los conservadurismos políticos y estatales. La experiencia ecuatoriana muestra que los discursos que buscan normalizar la violencia y degradar la noción misma de los derechos prosperan en un terreno abonado por el miedo, la inseguridad y la crisis social. De allí la insistencia en dos líneas que articulan el comprender y el hacer de la incidencia política: por un lado, *la tarea pedagógica de hacer ver* y el *hacer escuchar*; por otro, la urgencia de *recomponer las articulaciones que habiliten bloques de acción* capaces de moverse entre la protesta, la negociación y la concertación de alianzas estratégicas fuertes que derriben las diferencias y antepongan el pulso político en tiempos de crisis. Y para lograrlo, las mujeres de FAME proponen anclar en las estrategias de incidencia el cuidado y la seguridad como condiciones de posibilidad de cualquier interlocución.



En República Dominicana, las organizaciones registran una politización feminista creciente entre las jóvenes y una mayor resonancia pública por las luchas feministas y de género en contraste con posiciones políticas y gubernamentales que evidencian retrocesos y apropiación estatal del lenguaje de género sin transformaciones sustantivas, la persistencia de un Código Penal contrario a los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos y un clima de persecución hacia las personas racializadas que paraliza el trabajo comunitario.

La reducción y la desaparición de muchos fondos de cooperación europeos y la despriorización del género, han reducido proyectos y cerrado puertas, obligando a muchas organizaciones a repensar la sostenibilidad más allá de la cooperación. En el mapa de las alianzas se menciona expresamente al Gobierno de Canadá; también emergen interlocutores puntuales dentro de los partidos políticos con intereses en impulsar la agenda de no a la violencia contra las mujeres y la violencia basada en género. Se registra, además, la migración de los liderazgos sociales a cargos técnicos en el Estado y el debilitamiento de los mecanismos de solidaridad y denuncia, lo que estrecha los márgenes para la sociedad civil.

En ese contexto, la incidencia política se materializa en la presencia técnica sostenida en el Congreso, donde se ofrece conocimiento aplicado y acompañamiento legislativo, en el trabajo de articulación y simplificación del discurso para ampliar las audiencias más allá de círculos informados, la construcción de economías solidarias y servicios propios que amortigüen la intermitencia financiera y el reposicionamiento de la agenda de cuidados como eje conector capaz de recomponer las alianzas y reconectar con las necesidades sentidas de la población. En paralelo, los sectores de la iglesia progresista, que no es mucha, respaldan las luchas ambientales y anti-mineras, pero no siempre pueden apoyar públicamente la agenda feminista por los costos políticos que ello acarrea en sus propias bases.

Las voces dominicanas aportan una advertencia estratégica que atraviesa y es que la derecha política y los fundamentalismos han dominado la psicología de la comunicación y la producción de mensajes simples y emocionalmente potentes. La respuesta feminista, para ser eficaz, debe combinar rigor y claridad sin perder la densidad política, debe traducir sin trivializar la complejidad de los argumentos en relatos comprensibles y movilizadores. El reto generacional se inscribe en ese horizonte y es atraer nuevas caras, dismantlar estigmas sobre *el ser feminista*, abrir las puertas a quienes siendo feministas en la práctica, aún no se reconocen en la palabra. La incidencia, en esta clave, no se reduce a conquistar artículos de ley, por el contrario, implica disputar imaginarios, ampliar repertorios de identificación y construir legitimidades cruzadas con otros movimientos como los ambientalistas, que aún cuando son aliados no siempre puedan *poner el cuerpo* públicamente por los costos políticos que trae el apoyar las agendas duras del movimiento feminista y de mujeres.

Bolivia ofrece una cartografía donde el cierre del espacio cívico y la polarización electoral coexisten con los procesos de despatriarcalización y descolonización que han ampliado el campo del movimiento. Las narrativas anti-derechos, influenciadas por las agendas globales, se reitera opositora a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, cuestiona la paridad y considera que las leyes resuelven las violencias contra las mujeres y las niñas - VCMN. La reducción de la cooperación internacional, que para el caso de Bolivia se manifiesta en el retiro de la cooperación Holandesa, del Reino Unido y la considerable reducción de los fondos de Onu Mujeres, ha diezmado el tejido social, y se hace evidente porque en el transcurso de diez años se ha pasado de contar con dos mil organizaciones registradas a un poco más de doscientas actualmente.

A esa reducción se suman obstáculos materiales como las violencias digitales y simbólicas que están sufriendo las organizaciones, como ataques en redes y discursos estigmatizantes,



configurando un campo en donde incidir políticamente equivale también a defender la legitimidad misma de la presencia feminista en el espacio público.

Las Redes regionales, por su parte, observa un retroceso preocupante de los estándares en organismos como la OIT, la Agenda de Desarrollo y el debilitamiento o desaparición de los mecanismos de igualdad en varios países. Advierten, además, la emergencia de un efecto *demonstrativo autoritario* en el Sur global lo que amenaza el retroceso en los derechos civiles y políticos y reordena la agenda regional bajo nuevos hegemonismos. Frente a ello, revalidan la potencia de un tejido que, sin proclamarse homogéneamente feminista tiene la capacidad de irradiación trans-regional. La estrategia que proponen como Redes es congregar a las organizaciones que las integran y que están en los países con mayores retrocesos y fuertes pulsos autoritarios para aprender de sus formas de resistencias, producir recursos pedagógicos, construir sinergias y expandir el alcance de las acciones desde los esos nodos para afinar las estrategias de la incidencia política multinivel a partir de dichos aprendizajes que se convierten en denuncia y evidencia.



Elementos fundamentales de la geopolítica global y regional

El reordenamiento de la geopolítica: armas y cierre de fronteras

El reordenamiento geopolítico que atraviesa el sistema internacional desde el año 2022, se ha acelerado en los años 2024 y 2025 con tres vectores que se retroalimentan, por un lado, la rivalidad estratégica entre las grandes potencias (Estados Unidos - China - Rusia) y la fragmentación geo-económica, por otro lado, la ampliación de los BRICS⁷ (con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán), incorporados en el año 2024 y finalmente, el conflicto/genocida entre Israel-Gaza que funciona como un *parte de aguas* geopolítico y fiscal que consolidó un alineamiento político militar en gran parte del Norte Global en apoyo Israel, y en la práctica, desplazó la atención en los recursos de las agendas sociales de derechos humanos e igualdad⁸. Lo anterior, configura los nodos de poder y del financiamiento (fuera de los circuitos tradicionales de la OCDE⁹ y las advertencias del FMI¹⁰ sobre las turbulencias financieras y comerciales vinculadas a la geopolítica), y describe un escenario donde los regímenes de sanciones reescriben las cadenas de valor y las reglas de la inversión.

El giro a la seguridad dura, se expresa en el gasto militar récord, en seis años consecutivos al 2025, ha tenido alzas nunca antes registradas y esto, comprime los márgenes fiscales para la salud, la educación, y los cuidados, fija prioridades políticas bajo la lógica del “orden” y la “disuasión”. Este patrón se acompaña de restricciones crecientes del espacio cívico en democracias y regímenes híbridos, cierres regulatorios, vigilancia digital y criminalización de la protesta.

Los impactos del rearme y la apuesta por la seguridad dura, se dan en el mundo del derecho internacional humanitario, que en palabras de Tom Fletcher, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de OCHA dice, “... *Las guerras de Gaza, Sudán y Ucrania están marcadas por la ferocidad y la intensidad de las matanzas, el total desprecio por el derecho internacional y la obstrucción deliberada de los esfuerzos de nuestro movimiento humanitario por salvar vidas.*”.

En el año 2025, el sistema humanitario afronta una crisis de escala histórica: 305,1 millones de personas necesitan asistencia y protección. Los motores de esta crisis son eminentemente humanos. Por conflictos y violencia, a mediados del año 2024 casi 123 millones de personas estaban desplazadas forzosamente; la inseguridad alimentaria aguda golpea a más de 280 millones de personas cada día; y alrededor de 400 millones de niños y niñas viven en zonas de conflicto o huyen

⁷ La sigla BRICS se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recuperado en: <https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/brics>

⁸ Respecto a la crisis humanitaria del genocidio en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas guardó silencio y solo se pronunció a través de la Resolución 2728 de 2024 en donde pidió cese al fuego, solo en el mes del Ramadán, y además, lo hizo con abstención de Estados Unidos, tres vetos previos. En paralelo Washington aprobó en abril del año 2024, un paquete de 95,000 millones de dólares para Ucrania, Israel y la región Indo-pacífico destinados a asistir a Israel y la ayuda humanitaria vinculada, confirmando la centralidad del giro bélico y de seguridad dura en el Norte Global.

⁹ La OCDE, sigla de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o la OECD (en inglés) es un organismo internacional conformado por 38 países que comparten principios de democracia, economía de mercado y búsqueda de buenas prácticas de política pública. Su objetivo principal, según lo ha manifestado, es ayudar a los gobiernos a diseñar mejores políticas que promuevan el crecimiento económico sostenible, la inclusión social y el bienestar de sus ciudadanos. Recuperado en: <https://www.oecd.org/>

¹⁰ Sigla que significa Fondo Monetario Internacional. Recuperado en: <https://www.imf.org/es/Home>



de ellas. En el año 2024, cuatro de cada cinco muertes de civiles en conflictos ocurrieron en países con plan o llamamiento humanitario. A ello se suma la emergencia climática: 2024 se perfila como el año más caluroso registrado y, solo en el año 2023, hubo 363 desastres relacionados con el clima que afectaron al menos a 93,1 millones de personas y provocaron 26,4 millones de desplazamientos internos¹¹.

En conjunto, estas cifras describen un régimen de crisis crónica y simultánea en el que la violencia organizada, el colapso de medios de vida y el estrés climático se retroalimentan, ampliando el desplazamiento forzado y erosionando las capacidades estatales y comunitarias. Sin acción sostenida y coordinada (cierre urgente de la brecha de financiación, acceso humanitario seguro, protección de civiles, desembolsos flexibles y plurianuales, e inversiones en resiliencia y adaptación climática articuladas con políticas migratorias y de asilo basadas en derechos) es previsible un aumento de la mortalidad evitable, nuevos ciclos de desplazamiento forzados y retrocesos sustantivos en la igualdad de género y la cohesión social.

La geopolítica en América Latina y el Caribe

La impronta de los conflictos armados globales en América Latina y el Caribe se traduce en tensiones económicas y de seguridad que, aunque no ocurren en su territorio, afectan de manera directa las condiciones de vida de sus poblaciones. La guerra en Ucrania disparó los precios de los fertilizantes y los alimentos, lo que impactó con especial fuerza a países importadores netos como Centroamérica y el Caribe, aumentando la inseguridad alimentaria estructural. El conflicto en Gaza y el alineamiento del Norte Global hacia el refuerzo militar, ha contribuido a reordenar las prioridades presupuestarias, incentivando acuerdos de defensa y cooperación en seguridad con socios estratégicos de la región. Esto se observa, por ejemplo, en el incremento del gasto militar de Brasil que en el año 2024 superó los 22,000 millones de dólares, el más alto en dos décadas; otro ejemplo, es el reforzamiento de la asistencia en seguridad de los Estados Unidos hacia México, Colombia y Panamá, bajo el argumento de frenar el crimen organizado y contener las rutas migratorias. Estos procesos, sin embargo, trasladan recursos fiscales y políticos hacia la seguridad, dejando en segundo plano las agendas de derechos humanos, igualdad de género y cuidados.

En paralelo, la militarización de las fronteras y la externalización de las políticas migratorias ha convertido la región de LAC, en un espacio clave del nuevo orden de seguridad global. El tapón del Darién se ha consolidado como el mayor corredor de migración forzada del hemisferio, con más de 500,000 cruces en el año 2023, mientras que los cierres parciales y las deportaciones en el año 2024, impulsadas con el apoyo logístico y financiero de los Estados Unidos, desplazan a las mujeres, las niñas, los niños y las personas, LGBTIQ+ hacia rutas más letales en el Caribe y en el norte de México. Al mismo tiempo, la creciente influencia de la agenda anti inmigrante y antigénero, legitiman las políticas restrictivas que criminalizan tanto a las personas migrantes como a quienes las defienden. Así la combinación de guerras globales y respuestas de seguridad regionales fuerzan un círculo de exclusión que limita la cohesión social, profundiza la desigualdad y erosiona los avances feministas, LGBTIQ+ y los derechos humanos en la región.

Otras dimensiones de la geopolítica actual

Otra dimensión que fortalece el mapa de la geopolítica contemporánea es la tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA) y la gobernanza digital. Latinoamérica se encuentra en

¹¹ <https://www.unocha.org/events/global-humanitarian-overview-2025>



medio de una doble tensión, por un lado, la oportunidad de inserción en una economía global que cada vez demanda más capacidad tecnológica y por otro, el riesgo de quedar subordinada como exportadora de datos, materias primas para hardware o servicios externalizados, sin capturar un valor agregado. Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2024)¹² advertía que la región carece de una estrategia común de soberanía digital, lo cual deja a los países expuestos a la dependencia tecnológica de Estados Unidos, China y la Unión Europea, tanto en infraestructura de nube como en marcos regulatorios de datos.

Otra dimensión importante es la energía y los minerales críticos dentro de la transición verde, que hoy se han vuelto ejes de su competencia estratégica. América Latina y el Caribe posee reservas muy significativas de litio, cobre, níquel, entre otros minerales esenciales para baterías, energías renovables y electrificación. Un reporte de CEPAL (2024),¹³ sostiene que los minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto están en el corazón de la electromovilidad y la energía renovable, impulsando demandas crecientes de estos recursos en Chile, Argentina, Bolivia y Perú. La pugna geopolítica aquí se da en la apropiación de las cadenas de valor (empresas chinas, estadounidenses y europeas compiten por controlar contratos y marcos normativos).

El asunto no es solo extractivo sino también regulatorio y de equidad; en América Latina existe un número creciente de litigios relacionados con la transición energética. Un análisis reciente del Business & Human Rights Resource Center (2024)¹⁴ reveló que más de la mitad de los casos legales globales desde el año 2009 sobre los impactos de la minería para minerales de transición están en América Latina y el Caribe; la mayoría involucra proyectos de minería, impactos ambientales, disputas por el agua, y derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales. Esto convierte a la transición energética en un campo de disputa no solo económica, sino de derechos humanos y de justicia ambiental.

La ecología de este nuevo capítulo de la geopolítica compromete también los derechos de la naturaleza como actor jurídico y político. La Opinión Consultiva OC-32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2025)¹⁵ asume principios que ponen en el centro los derechos de los ecosistemas, la protección ambiental, la transparencia, los daños y pérdidas asociadas al extractivismo, reconociendo que los territorios biodiversos de América del Sur (por ejemplo humedales andinos) tienen funciones ambientales esenciales que trascienden las fronteras. En la práctica, esto implica que los proyectos de extracción minera o energética no pueden analizarse únicamente desde la óptica económica, sino como dilemas geopolíticos con consecuencias regionales e intergeneracionales.

La geopolítica, la policrisis/permacrisis

La geopolítica contemporánea se caracteriza por un reordenamiento inestable en el que convergen la rivalidad entre las grandes potencias, los conflictos armados prolongados y las transformaciones aceleradas de la economía mundial. En ese escenario, conceptos como la policrisis

¹² <https://www.csis.org/>

¹³ Recuperado en: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/presentacioncepal_xiicamma.pdf

¹⁴ Recuperado en: <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/latest-from-the-un-business-and-human-rights-forum-2024/>

¹⁵ Recuperado en: <https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/>



y la permacrisis han ganado fuerza para describir una época en la que los choques sanitarios, militares, climáticos, financieros y sociales, ya no son episodios aislados, sino fenómenos interconectados que se retroalimentan y producen una sensación de crisis permanente.

La policrisis se refiere a la acumulación simultánea de múltiples crisis que se agravan mutuamente, mientras que la permacrisis alude a la prolongación de un estado de inestabilidad crónica. Ambos términos más allá de su origen semántico en medios europeos, como la Collins o en análisis financieros como CaixaBank Research, son herramientas analíticas que permiten comprender cómo la geopolítica global condiciona la economía, la política internacional y, por extensión, los márgenes de acción de regiones como la de América Latina y el Caribe. El vocablo permacrisis surge como una forma de escribir un periodo prolongado, inestabilidad e inseguridad estructural, donde una sucesión de eventos severos, como la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, la crisis energética, las disrupciones en las cadenas globales de suministro, no sólo se sucede, sino que se superponen.

Estos términos reflejan desafíos reales para la gobernanza global, ya que la economía internacional ha tenido que digerir desde el año 2020, sorpresas negativas consecutivas que han alterado las estructuras que parecían estables tras la crisis financiera del año 2008. En un artículo de Funcas (Economía internacional en tiempos de Policrisis),¹⁶ se describe como estos múltiples choques generan tensión en los marcos de la política económica porque la política monetaria encuentra límites cuando las tasas de interés se elevan, pero la inflación, permanece alta; los gobiernos enfrentan déficits crecientes, deuda costosa y la demanda social presiona en medio de la recesiones o los estancamientos (Funcas, 2023).

El alcance de estas crisis simultáneas es geopolítico, los países que habían logrado capear los vientos contrarios enfrentan ahora mayor exposición. Las cadenas de valor fueron tensionadas hasta el quiebre por cuellos de botella, interrupciones, migraciones y disrupciones climáticas. A su vez, la inflación energética y alimentaria se ha convertido en un vector de inestabilidad política porque muchas poblaciones que enfrentan encarecimiento de los servicios básicos, los combustibles y los alimentos comienzan a exigir respuestas estatales urgentes, mientras la capacidad fiscal de muchos países aparece limitada. Los bancos centrales, los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional - FMI, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, han advertido sobre los riesgos del endeudamiento excesivo, la inflación persistente, la crisis de la deuda soberana en los países de ingresos bajos y medios y las amenazas al contrato social.

La policrisis exige entonces que los gobiernos no sólo respondan a las crisis económicas tradicionales, sino también a las crisis de legitimidad de la salud pública, climática, energética y de seguridad. Se ve una tensión creciente entre las demandas ciudadanas a la protección social y la estabilización económica, y el imperativo de priorizar presupuestos de defensa, de contención migratoria y seguridad, que relegan las políticas de igualdad, de ambiente y de derechos, a un segundo plano. Estos fenómenos intensifican las tendencias populistas, autoritarias y nacionalistas, que encuentran el terreno fértil, cuando la ciudadanía percibe que su bienestar material está bajo la amenaza constante.

¹⁶ <https://www.funcas.es/articulos/economia-internacional-en-tiempos-de-policrisis/>

El estrategia en la región LAC

América Latina y el Caribe entra en la policrisis/permacrisis con vulnerabilidades particulares. Muchos países de la región ya arrastran niveles de alta deuda, inflación persistente, dependencia de exportaciones de commodities¹⁷, impactos climáticos severos y crisis migratorias tanto internas como externas.

Los gobiernos se enfrentan al menos dos tipos de riesgo adicional, el primero, la exposición al endeudamiento en moneda extranjera y la revalorización de las deudas ante la inflación global, lo que implica fuertes costos fiscales sólo para sostener el servicio de la deuda, comprometiendo los fondos para la salud, la educación y el gastos social; segundo, la fragilidad institucional, ya que muchos países tiene sistemas de gobernanza debilitados, altos niveles de informalidad laboral, debilidad del Estado de derecho, independencia de los ingresos variables como los derivados de los commodities, turismo o remisas. Eso hace que el impacto de una crisis externa, como la caída de los precios o una crisis climática, impacte de manera desproporcionada a los sectores más empobrecidos de las regiones menos desarrolladas.

En términos de la geopolítica global, la permacrisis/policrisis tensionan en el orden internacional y para LAC implica que tenga que navegar en juegos de poder global donde su posición periférica le da menos margen, pero también cierta ventaja en las alianzas Sur-Sur, o en espacios multilaterales en donde pueden mandar mayor equidad.

Una dimensión menos visible pero crucial, es la crisis ambiental y climática como elemento estructural de la permacrisis. No es solamente que haya fenómenos extremos (como sequías, inundaciones, olas calor, etc.), sino que estos fenómenos deterioran la infraestructura, la agricultura, la salud y la movilidad, lo que genera pérdidas económicas directas y presiones migratorias. En LAC, esta crisis climática activa las transiciones de pérdidas y daños que los países vulnerables reclaman que se internalice en políticas globales. Al mismo tiempo, la transición energética impone costos pero también posibilidades de innovación si se acompaña con políticas públicas fuertes.

El concepto de permacrisis, abre además interrogantes sobre la sostenibilidad social, *¿cómo mantener el contrato social, cuando las y los ciudadanos perciben que los costos* (inflación, recortes, precarización), *se trasladan principalmente a quienes tienen menos?*. Aquí entra la problemática de la desigualdad, no sólo de ingresos, sino de oportunidades como el acceso a la salud, a la educación, a los servicios básicos, a la protección frente al clima. Los movimientos sociales, feministas, de trabajo decente, de derechos humanos de la región tienen un rol decisivo para lograr la visibilidad de estas brechas y presionar para generar políticas redistributivas fiscales progresivas y con mayor transparencia en el uso de los recursos (esta puede ser una agenda y una ruta de incidencia política multinivel).

¹⁷ Las commodities, son las materias primas, es decir un material tangible con el que se puede comerciar y que su potencial principal es su transformación en otros bienes de mayor elaboración y valor en el mercado. Recuperado en: <https://www.alterfinancegroup.com/blog/diccionario/significado-de-commodities>

La cruzada anti-género como estrategia de la geopolítica

Al mapa del nuevo orden mundial, se superpone una cruzada anti-género con coordinación y financiamiento transnacionales; investigaciones del European Parliamentary Forum¹⁸, de la Global Philanthropy Project y del Sexuality Policy Watch muestran como Think Tanks conservadores, redes religiosas y filantropías oligárquicas, articulan, campañas, litigios y capturan normativas para dismantelar, entre otros asuntos, la Educación Sexual Integral - ESI, restringir los derechos sexuales y los derechos reproductivos y vaciar de contenido las políticas de igualdad. La magnitud financiera de estos apoyos a la agenda anti-género ya se mide en miles de millones de dólares en la última década, con efectos muy concretos en prohibiciones y vetos (a la palabra género y mujeres en todas sus diversidades), difamación digital y acoso judicial contra activistas, defensoras/es y organizaciones. A la vez, varios gobiernos y partidos integran estas agendas a sus plataformas, generando sinergias entre el poder estatal, el capital político-religioso y los megáfonos mediáticos. La narrativa se apoya en pánicos morales (defensa de la infancia, ideología de género), empaquetados para consumo masivo y traducción normativa.

Los retrocesos se distribuyen de forma desigual, pero presentan patrones comunes. En Estados Unidos, el péndulo normativo posterior a Dobbs¹⁹, se ha traducido en prohibiciones totales o casi totales de aborto en 14 estados a abril del año 2025, junto con un volumen sin precedentes de los proyectos de ley anti LGBTIQ+, a nivel estatal y que afectan el acceso a la salud, la educación y la participación pública de las personas trans y no binarias.

En Europa, Polonia y Hungría han sostenido agendas de restricción educativa y de derechos, mientras Italia y otros países muestran pulsos normativos y administrativos tendientes a la cruzada anti-género. En África, leyes punitivas contra la diversidad sexual en Uganda y debates legislativos en otros países elevan los riesgos y consolidan estigmas en contra de las organizaciones feministas y LGBTIQ+. En todos los casos, la ofensiva combina legislación, reglamentación y presupuestos punitivos con campañas de hostigamiento online y offline.

La expansión y efectos de la cruzada antigénero en América Latina y el Caribe (ALC) durante los años 2024 y 2025, son:

Países andino:

FAME En Bolivia, se observan picos de movilización conservadora contra los contenidos educativos y las políticas de igualdad, con un fuerte componente religioso en la retórica pública.

¹⁸ Recuperado en: <https://www.epfweb.org/node/1147>

¹⁹ Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women 's Health Organization en junio de 2022, las personas en los EE. UU. que pueden quedar embarazadas se enfrentan a una crisis de derechos humanos sin precedentes. En Dobbs, la Corte Suprema anuló el derecho constitucionalmente protegido de acceder al aborto, dejando la cuestión de si regular el aborto y cómo hacerlo en manos de los estados individuales. Aproximadamente 22 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en Estados Unidos viven ahora en estados donde el acceso al aborto está muy restringido y, a menudo, totalmente inaccesible. Este documento informativo detalla la intensificación de la emergencia de derechos humanos causada por la decisión y analiza las formas en que Dobbs contraviene las obligaciones internacionales de derechos humanos de Estados Unidos. <https://www.globaljusticecenter.net/es/human-rights-crisis-abortion-in-the-united-states-after-dobbs/>



FAME En Ecuador, la polarización política y la crisis de seguridad fortalecieron las narrativas moralizantes contra la ESI y los derechos trans. Organizaciones feministas denuncian retrocesos en el acceso a salud sexual y la salud reproductiva y los obstáculos para implementar las sentencias que amplían los derechos.

FAME En Colombia, se combinan la jurisprudencia avanzada en derechos LGBTIQ+ y salud sexual y salud reproductiva con una contraofensiva política y cultural. Actores conservadores han cuestionado los lineamientos de la ESI, los protocolos de la transición de género y las políticas locales de inclusión

FAME En Perú, en el año 2023 se aprobó la Ley 31888 (derechos de los padres en la educación) utilizada por sectores antigénero para atacar el enfoque de género en el currículo. Durante los años 2024 y 2025, colectivos conservadores intensificaron los litigios y la presión sobre el Ministerio de Educación. Los movimientos feministas y LGBTIQ+ enfrentan hostilidades en medios y restricciones administrativas.

FAME En Paraguay, con una histórica agenda conservadora, en el año 2017 decretó una prohibición administrativa del enfoque de la ideología de género en la educación que habilitó la censura de materiales y formación a personal docente en ESI. En el año 2024, avanzaron las iniciativas para endurecer el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales, elevando las cargas administrativas y el riesgo de asfixia regulatoria.

En el Caribe

FAME En el Caribe, la República Dominicana reactivó, a través del nuevo Código Penal, la disputa por los derechos sexuales y derechos reproductivos y se mantuvo el rechazo a las tres causales. Sectores religiosos y conservadores han presionado para redefinir las políticas de igualdad y frenar los avances en la no discriminación y la ESI.

En Centroamérica

FAME En México, a nivel federal se sostienen los marcos de igualdad y no discriminación, sin embargo, a nivel estatal, persisten los vetos curriculares y las campañas en contra de los lineamientos de ESI y el reconocimiento de las identidades trans en las escuelas.

FAME En Guatemala, tras el archivo de la iniciativa 5272 en 2022 (ahora decreto 18-2022), persistieron entre los años 2024-2025, las propuestas para restringir la ESI y reforzar las definiciones de familia tradicional. La sociedad civil reporta vigilancia y hostigamiento, en paralelo a intentos de debilitar las autonomías universitarias y los espacios de protesta. Los avances en el reconocimiento de identidades trans siguen bloqueados, y la igualdad matrimonial no ha sido habilitada.

FAME En Nicaragua, el cierre masivo de organizaciones sociales, incluyendo colectivos feministas y de derechos LGBTIQ+ y la criminalización del disenso configuran el escenario más restrictivo de la región.

FAME En Honduras se mantienen las reformas constitucionales que blindan la prohibición del aborto y del matrimonio igualitario (candados de 2021). Colectivos conservadores impulsan



la vigilancia sobre la ESI y la criminalización simbólica de activistas y personas defensoras. Las organizaciones feministas y LGBTIQ+ operan con altos riesgos, especialmente fuera de las capitales departamentales.

FAME En El Salvador, el régimen de excepción erosiona garantías y elevó riesgos para periodistas, personas defensoras y colectivos LGBTIQ+. Su política de seguridad reforzada actualmente por las políticas de Estados Unidos, ha sumido el presupuesto y las políticas sociales a un nivel relegado y de bajo interés gubernamental. El aborto es penalizado en todas las causales y se vienen paulatinamente desmantelando las instituciones relacionadas a las mujeres y los asuntos de género.

FAME En Panamá, la Corte Suprema (2023) negó el reconocimiento del matrimonio igualitario, decisión cuyos efectos continuaron entre los años 2024 y 2025. Persisten los proyectos y las campañas que cuestionan la ESI y el reconocimiento de las identidades trans. La movilización social por temas ambientales y laborales convive con contraofensivas morales en el terreno educativo.

FAME En Costa Rica, aunque es un referente en reconocimiento de los derechos LGBTIQ+ (matrimonio igualitario vigente desde el año 2020), actores antigénero mantienen campañas contra la ESI y las políticas escolares. Las tensiones se expresan en disputas municipales y en intentos de restringir los contenidos curriculares; el control judicial ha frenado varios de estos esfuerzos.

Países del cono sur

FAME En Chile, si bien no prosperaron las restricciones estructurales en la reforma constitucional, persisten embates contra los protocolos de inclusión y la ESI. La institucionalidad de la igualdad cuenta con respaldo legal, pero enfrenta campañas de deslegitimación en redes de manera permanente.

FAME En Uruguay, que cuenta con marcos avanzados en igualdad y diversidad, registra menor intensidad legislativa antigénero, pero no está exenta de campañas culturales que buscan desfinanciar programas y cuestionar la ESI.

FAME En Argentina, con el desmantelamiento del Ministerio de la Mujer y la implementación de protocolos anti-protesta reconfiguraron la arquitectura de la igualdad y el espacio cívico. La política gubernamental del liberalismo extremo viene cerrando los espacios cívicos, retrocediendo en la agenda de género y diversidades y sumiendo a la población en un empobrecimiento sin precedentes en el país.

FAME Brasil, aún con un gobierno federal comprometido con la igualdad, persisten ofensivas subnacionales y judiciales. Municipios y estados impulsaron prohibiciones del llamado lenguaje neutro y restricciones a materiales educativos con enfoque de género. Colectivos ultraconservadores conservan la capacidad de movilización y litigio, lo que presiona las agendas educativas y de salud sexual y reproductiva

Venezuela y Cuba (contextos particulares)

FAME En ambos casos, las restricciones a la libertad de asociación y de expresión condicionan la acción de las organizaciones autónomas y sociales. Cuba adoptó un Código de las Familias progresista (2022), pero el espacio cívico es limitado; en Venezuela, la crisis humanitaria y el cierre cívico dificultan la incidencia política. La retórica antigénero aparece de forma intermitente y es instrumentalizada en disputas políticas internas.

Del análisis anterior se deduce que la avanzada antigénero opera a través de cinco líneas de acción, que además son recurrentes:

FAME Captura o presión institucional para despolitizar, desprestigiar, frenar o vaciar de contenido a las políticas públicas de género

FAME Ingeniería legal y administrativa que ponen en el escenario político y legislativo normativas mal denominadas provida, la generación de vetos a los lenguajes acordados o a nuevas propuestas de inclusión de lenguajes de género en leyes nacionales, prohibiciones de la atención afirmativa imponiendo requisitos administrativos restrictivos que impiden a las organizaciones especialmente feministas y LGBTIQ+ a donaciones, recursos públicos y cooperación internacional

FAME Censura curricular y bibliográfica en colegios y universidades respecto a la ESI, la diversidad familiar, la planificación y la anticoncepción, la historia de los movimientos LGBTIQ+ y feminista

FAME Asedio comunicacional como bots, granjas de contenido, campañas de desinformación, troleo y doxing

FAME Litigio estratégico y penalización simbólica a causas penales/administrativas relacionada con la agenda feminista y de género.

El financiamiento para el desarrollo

El financiamiento para el desarrollo (FfD) es el andamiaje políticotécnico que define de dónde salen y cómo se combinan los recursos (públicos y privados, domésticos e internacionales) para financiar o sostener un desarrollo sostenible con justicia social y de género. Su hoja de ruta global se fue construyendo en tres grandes conferencias: Monterrey (2002), Doha (2008) y Addis Abeba (2015), cuyo resultado (la Addis Ababa Action Agenda) ordena la acción en siete áreas: *movilización de recursos internos (fiscalidad), financiamiento privado, cooperación internacional pública (AOD), comercio, deuda, cuestiones sistémicas y datos/seguimiento. La propia ONU sintetiza que la AAAA es el marco global para implementar la Agenda 2030, anclado en Monterrey y Doha.*

Desde el año 2016, existe el Foro anual de seguimiento FfD en ECOSOC, mientras las grandes conferencias marcan los hitos políticos de reposicionamiento. Con ese telón de fondo, en Sevilla, España en el año 2025, se realizó la IV Conferencia de Financiamos (FfD4)²⁰ que actualizó ese marco con el llamado “Compromiso de Sevilla”, una declaración de ruta que reconoce la necesidad de aumentar la escala, mejor eficiencia, reformar los elementos del sistema financiero internacional y la necesidad de energizar dicha agenda en plena rivalidad geopolítica y de crisis de deuda.

La geopolítica tensiona a cada una de las fuentes y espacios de decisión. Primero por la orientación de las prioridades fiscales en los países de altos ingresos ante el aumento del gasto en defensa y la inestabilidad comercial/tecnológica, que compiten con presupuestos para Ayuda Oficial al Desarrollo -AOD y empujan a los donantes a priorizar zonas y sectores estratégicos. Segundo, por la fragmentación (bloques, sanciones, desacoples selectivos) que multiplican las fricciones financieras y comerciales. Tercero, por la crisis de deuda en países de ingresos bajos y medios que drenan espacio fiscal para políticas de igualdad y cuidados. Los informes anuales de la ONU sobre financiamiento para el desarrollo (Financing for Sustainable Development Report, IAFT/UNDESA²¹), llevan varios años advirtiendo que la brecha de financiamiento para los ODS se amplía, con costos de deuda en máximos y crecimiento anémico en el Sur.

En el año 2023, la AOD, alcanzó un nuevo máximo nominal, según la OCDE/DAC, impulsada entre otros factores, por gastos en refugiados en países donantes, alivios contables y mayores créditos no concesionales explican buena parte del aumento. Eso no se traduce automáticamente en recursos flexibles y plurianuales para organizaciones feministas y LGBTIQS+ de base (las que sostienen refugios, asesorías legales, cuidados comunitarios e incidencia técnica), ni en presupuestos con marcadores de género.

La gobernanza del FfD expuso, además, fisuras políticas. La baja presencia del G7 en Sevilla (con la salvedad de Francia) y la retirada de Estados Unidos del documento final alimentaron la lectura de un multilateralismo debilitado.

A la reducción de varios donantes europeos se suma el traslado de prioridades hacia la seguridad y control migratorio. En LAC, la participación en la ayuda global cayó de alrededor del 20% en los años ochenta a menos del 10% hoy. Frente a ello, crecieron fuentes no tradicionales como la filantropía privada que movilizó cerca de 70.000 millones de dólares en la última década en la

²⁰ <https://financing.desa.un.org/es/ffd4>

²¹ <https://desapublications.un.org/publications/financing-sustainable-development-report-2024>



región, con el desafío de alinearse a políticas nacionales y estándares de transparencia fiscal y la cooperación Sur-Sur ronda los 400 millones anuales de dólares.

La educación ilustra los cuellos de botella sectoriales. La UNESCO advirtió que la ayuda a la educación cayó un 12% en el año 2024 y podría reducirse en más de una cuarta parte entre los 2023 y 2027, poniendo en riesgo el derecho a la educación de millones de niñas y niños, especialmente en contextos de conflicto. Estos recortes se producen cuando la inversión en cuidados y en sistemas de protección social con perspectiva de género sería más contracíclica y multiplicadora.

La crisis estructural de la cooperación internacional y de las agencias históricamente pilares en LAC

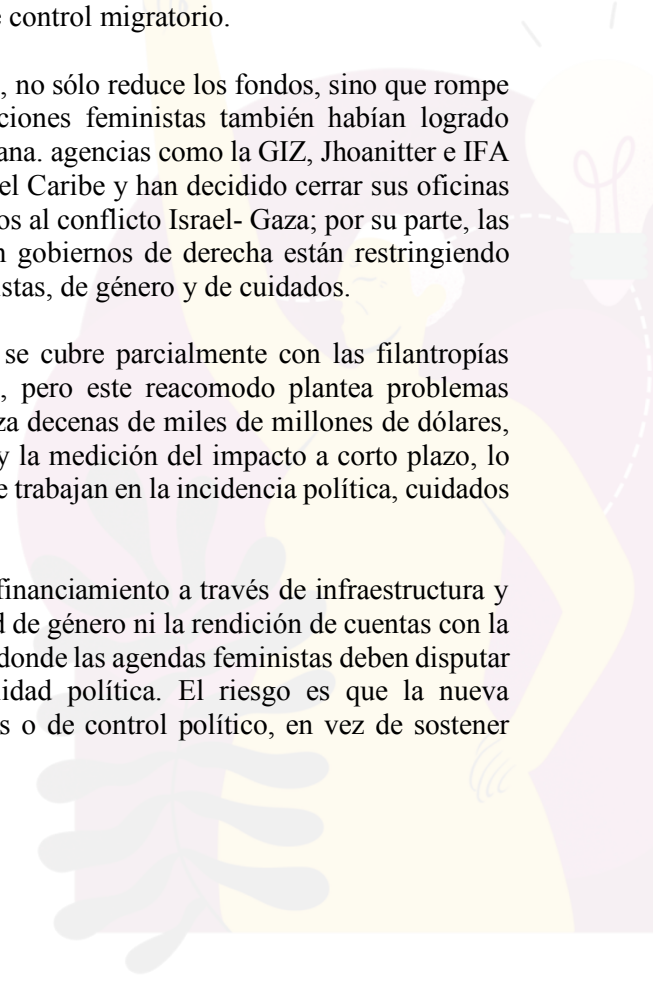
La salida de la USAID del campo de la cooperación para el desarrollo y la restricción de los fondos subvencionables de las agencias europeas, generan una crisis de legitimidad y la fatiga política en las organizaciones sociales que tienen que alternar el activismo con la sostenibilidad. Desde el año 2022 se observa un cierre de oficinas de cooperación bilateral en Centroamérica y el Caribe, particularmente en los países con regímenes autoritarios y una reorientación hacia las alianzas público- privadas, más alineadas a intereses comerciales o de seguridad.

La cooperación nórdica, históricamente clave en materia de igualdad de género enfrenta recortes internos por presiones fiscales y agendas nacionalistas, lo que pone en riesgo los programas de largo aliento. La cooperación española (AECID) con presencia en América Latina y el Caribe, atraviesa un proceso de redefinición presupuestaria que la lleva a priorizar proyectos en África y acondicionar los recursos en América Latina a marcos de control migratorio.

La desaparición o debilitamiento de estos actores, no sólo reduce los fondos, sino que rompe circuitos de interlocución política, donde las organizaciones feministas también habían logrado incidir históricamente. En el caso de la cooperación alemana, agencias como la GIZ, Jhoanitter e IFA también están retirando sus fondos en América Latina y el Caribe y han decidido cerrar sus oficinas en Colombia y Ecuador y redireccionar todos sus esfuerzos al conflicto Israel- Gaza; por su parte, las cooperaciones internacionales como la sueca, ahora con gobiernos de derecha están restringiendo absolutamente todos los recursos para las agendas feministas, de género y de cuidados.

El vacío dejado por los donantes tradicionales, se cubre parcialmente con las filantropías privadas y de financiamiento de potencias emergentes, pero este reacomodo plantea problemas políticos y éticos. La filantropía corporativa, que moviliza decenas de miles de millones de dólares, suele priorizar la visibilidad, la innovación tecnológica y la medición del impacto a corto plazo, lo que margina a los colectivos feministas y LGBTIQ+ que trabajan en la incidencia política, cuidados o la defensa de los derechos humanos.

China y otros actores del Sur Global, canalizan financiamiento a través de infraestructura y de créditos blandos, pero no incorporan la transversalidad de género ni la rendición de cuentas con la sociedad civil. En este sentido, se configura un campo en donde las agendas feministas deben disputar no sólo la cantidad de recursos, sino también su calidad política. El riesgo es que la nueva cooperación, se limite a reproducir lógicas extractivistas o de control político, en vez de sostener proyectos transformadores de justicia de género.





¿Oportunidades en la agenda de financiamiento para el desarrollo?

El Compromiso de Sevilla (2025), abrió un espacio de disputa al reconocer la urgencia de reformar la gobernanza tributaria internacional, la arquitectura de la deuda y la necesidad integrar las agendas de cuidados. Aquí se ubican las oportunidades para la incidencia política: i. *exigir que los procesos de fiscalidad global incluyan metas expresas de financiación para la igualdad;* ii. *condicionar las ventanas climáticas del FMI y el Banco Mundial a indicadores de género y cuidados y* iii. *Disputar el diseño de la cooperación Sur-Sur para que no se convierta sólo en transición entre las élites.*

Al mismo tiempo, CEPAL y OIT pueden ser plataformas para articular una agenda feminista de financiamiento que conecte el trabajo decente, la protección social y la sociedad del cuidado. La cuestión clave es *¿cómo insertar las voces de las organizaciones feministas y LGBTIQA+ en estos debates, superando la exclusión sistemática que fueron denunciadas en la Conferencia en Sevilla?*. Si estas voces no logran entrar en la toma de decisiones, el riesgo es que los consensos globales se traducen en marcos normativos vacíos que no alcanzan a modificar los presupuestos nacionales ni a garantizar la sostenibilidad de las organizaciones en territorio.

Para las agendas feministas, LGBTIQA+ y de cuidados, la forma del financiamiento importa tanto como el monto. Recursos flexibles, plurianuales y directos a organizaciones de base son condición de posibilidad para convertir marcos como la AAAA, el Compromiso de Sevilla, los consensos o declaraciones en Naciones Unidas en los últimos años y los compromisos regionales (CEPAL) en leyes, presupuestos y servicios que sostengan la vida. Sin ese canal, la infraestructura social del cuidado se queda en retórica.



Opiniones del contexto que retan el contexto global y regional

Para la elaboración complementaria del contexto, se indagaron opiniones de diversas personas que desde diferentes enunciaciones, entidades y territorios, conversaron con FAME sobre el contexto global y en LAC, y principalmente, sobre los posibles caminos estratégicos que las alianzas como el Proyecto FAME deben mantener, fortalecer y configurar. Los comentarios, reafirman lo analizado anteriormente sobre el contexto global y el ciclo de retrocesos, repliegues y reconfiguraciones que tienen las agendas feministas, LGBTIQ+, pero advierten que históricamente, las crisis han acompañado a estas agendas y de diferentes maneras, la resiliencia política, la movilización y las apuestas políticas han logrado un pulso que no ha permitido que las luchas desaparezcan.

La fotografía de las opiniones es dura, pero no plana; como subrayó Sandra Castañeda de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe- RSMLAC, el presente se vive como una poli/permacrisis en la que se debilitan las democracias y avanzan las iniciativas fundamentalistas y anti-derechos y se recortan políticas públicas básicas. En esa misma línea, Hillary Anderson (Comisión Interamericana de la Mujer- CIM) menciona que actualmente confluyen varios aspectos, por un lado el cierre de los espacios cívicos y la restricción de los recursos; Por su parte, Sira Taveras de CIPAF confirma que en la República Dominicana *“vemos retrocesos claros, especialmente en los últimos cinco años” y un recorte de financiamiento que empuja a estrategias de auto sostenimiento*. Para Milena Páramo del CLADEM, el panorama es más complejo, cuando dice, que *“no es solo menos dinero, sino una disputa por los recursos que vuelve más competitivo el ecosistema, fragmenta a los movimientos y estrecha el acceso a los foros donde antes se incidía con continuidad”*.

Marcelo Ferreyra de Synergia de Argentina y la Coalición de Derechos LGBTIII de las Américas en la OEA, describe el golpe concreto de los recortes provenientes de Estados Unidos y su efecto dominó en el sistema interamericano: *“tuvimos que despedir personal, suspender actividades y esto impactó en toda la región”*. Clyde Soto, investigadora de CLACSO, muestra el reverso jurídico y financiero del cerco cuando dice que hay proyectos de ley para deshabilitar a las organizaciones no gubernamentales, controles bancarios que se convierten en mecanismos de asfixia y un clima de incertidumbre jurídica que instala a las organizaciones bajo una espada de Damocles.

Por otro lado, las personas identifican la arquitectura cultural de esa estructura. *“El patriarcado se va reafirmando cada vez más”*, observa Eulogia Familia de la Unidad Sindical de Mujeres Activas - UNÍSIMAS, y advierte que la nueva derecha institucionaliza los argumentos religiosos y morales para *“diezmar nuestra capacidad organizativa”*, mientras redobla una *“conservadurización social que castiga la autonomía corporal, el pluralismo y la educación sexual integral - ESI”*. Por su parte, Elena Pérez de CONLACTRAHO, describe el mismo fenómeno con el prisma laboral, cuando afirma que aún con dieciocho ratificaciones del Convenio 189 de la OIT, el *“gran problema sigue siendo su aplicación” y, en el péndulo político, la disminución de los derechos avanzan en especial sobre las mujeres y las personas LGBTIQ+*. Para Soto, no hay espontaneidad sino que existe una avanzada antiderechos planificada que recicla las narrativas y las tácticas en distintos países. Las entrevistas convergen en que la ofensiva no solo recorta derechos formales, sino que desmantela los lenguajes públicos que los sostienen, reinstalando pánicos morales contra el género, la diversidad y la educación sexual integral.



El multilateralismo aparece en todas las conversaciones como un espacio en disputa y, a la vez, como posibilidad acotada. Alejandra Scampini, consultora para Onu Mujeres Regional, da cuenta del deterioro material de los espacios multilaterales, en donde hay cada vez más, menor participación de sociedad civil, hay recortes del personal en muchas agencias de Naciones Unidas - NU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDH y una agenda crecientemente absorbida por lo humanitario; pero en esos mismos espacios, se vienen *“acomodando los lenguajes”* frente a los ataques a la ciencia y a la Agenda 2030. Anderson, coincide cuando dice que *“hay menos espacios donde hablar y poco apetito para seguir en la pelea”*; términos consolidados como la interseccionalidad o el género vuelven a discutirse o se vetan de facto.

Sin embargo, no todo se cierra y hay algunas ventanas de oportunidad; por ejemplo, la CIM, empujada por sus Estados miembros y con apoyo del gobierno de Canadá, *“ha abierto espacios de coordinación con la sociedad civil y con los mecanismos nacionales para fortalecer la agenda feminista en la región”*; otro espacio, es que en la XV Conferencia Regional de la Mujer se vio *“una masa crítica que reactiva la sociedad del cuidado como horizonte de la política pública”*. La incidencia efectiva (o a la que se debe llegar) ya no se juega en la presencia masiva, sino en las capacidades específicas porque *“no es un apagón de la incidencia política pero sí un repliegue que requiere habilidad, técnica y capacidades instaladas”* que obligan además a que las estrategias están muy *“articuladas entre lo global, lo regional y lo local”*. Otro aspecto que es relevante en las conversaciones, es que casi todas las personas coinciden en que en medio de esta crisis hay que generar *“mesas chicas”* de negociación en donde se pueden hacer acuerdos y seguimientos con mayor efectividad; y al mismo tiempo, se deben mantener las formaciones intergeneracionales que acorten la curva de aprendizaje y se puedan transmitir las experiencias y capacidades para la incidencia política multinivel.

La economía política del cuidado aparece como bisagra entre el diagnóstico y la estrategia. Para Juan Felipe Echeverri, líder del programa Generando Equidad de USAID en Colombia, comenta que el desafío en la actual crisis, es traducir el cuidado en un *“cambio de comportamiento”* sostenido y con reglas de juego que pasen *“del reconocimiento a la redistribución, reducción, recompensa y representación”*. Propone una entrada pragmática de relacionamiento con el sector privado *“ser como un caballo de Troya”*, para alinear los incentivos de la productividad, la reputación y la retención con derechos y la corresponsabilidad, sin ceder en las agendas políticas. Eulogia Familia, lo formula en clave de democracia cuando dice: *“no hay democracia donde los cuidados no son relevantes”*. Y, aun en contextos hostiles, Clyde Soto constata que el cuidado conserva ventanas de oportunidad: el *Estado puede mostrarse orgulloso de una política de cuidados incluso cuando prohíbe la palabra género*; ese filo requiere vigilancia para evitar despolitizaciones, pero ofrece un pasaje viable para tejer alianzas con gobiernos locales, sindicatos y actores sociales. La lectura compartida es nítida: el cuidado como infraestructura social y no como paliativo, permite recomponer la legitimidad, el empleo con derechos y la sostenibilidad de la vida en medio de la austeridad y los retrocesos.

En cuanto al mapa de actores y los alineamientos políticos obligatorios, hay consensos y matices. Anderson ubica a Canadá, Francia o España como aliados consistentes, aunque *“más exigentes en sus modalidades de apoyo”*. Ferreyra, observa que la crisis permitió distinguir a *“los aliados verdaderos de los aliados circunstanciales”*: el repliegue de un donante principal obligó a otros a *“administrar fondos de manera independiente”*, abriendo canales directos donde antes había un intermediario único. Milena Páramo amplía el mapa con zonas poco exploradas como la filantropía, que en países de Asia las mujeres y sus organizaciones trabajan muy cerca con la responsabilidad social empresarial y hace un llamado a sortear las *“barreras culturales e idiomáticas”* para hacer un



acercamientos con dichas experiencias que pueden abrir una ventana de oportunidad. Sira Taveras dice que más que identificar un mapa de actores, es necesaria la articulación regional como una estrategia de resguardo para contextos más críticos (Caribe), y Elena Pérez subraya, que la clave es convertir las alianzas en pactos no coyunturales capaces de sostenerse más allá de una cumbre o de una coyuntura de financiamiento.

Los diálogos también ponen en primer plano un dato generacional y organizativo: *sin cuidados internos no hay movimientos sostenibles*. El autocuidado y el cuidado colectivo, propone Anderson, no debe ser una exhortación retórica, sino una condición de posibilidad. La fatiga y el desgaste derivan en parálisis, y la parálisis erosiona la voz pública y la capacidad para la incidencia política. De allí se desprende otra coincidencia y es, la urgencia de *fortalecer los liderazgos con perspectiva interseccional, reducir la curva de aprendizaje en los espacios de participación en las agendas multilaterales, y profesionalizar la comunicación política*. Milena Páramo recuerda la necesidad de formar habilidades blandas como el “*escuchar, hablar mejor, relacionarse*” y de sostener procesos intergeneracionales, no como “*relevó*” que descarta a las personas mayores, sino como “*coexistencia*” que traspasa contactos, métodos y claves del lenguaje diplomático.

Mirado desde las consecuencias del contexto y la crisis del financiamiento, el impacto diferencial sobre las mujeres y las disidencias sexuales atraviesa todos los niveles. Para Taveras, el síntoma local son los “*cierres de espacios*” y “*menos organizaciones activas*”; para Elena Pérez, hay una combinación peligrosa de “*retroceso hacia el fundamentalismo y políticas públicas que permiten la discriminación abierta*”; para Eulogia Familia, los impactos son una cadena de efectos que van “*de la pérdida del empleo al riesgo para la vida, acompañada por una menor protección social y el reforzamiento de los estereotipos de obediencia en el hogar*”. Juan Felipe Echeverri, por su parte añade que se está ante un punto ciego persistente porque *las estrategias de cuidado siguen ancladas en una visión binaria y heterocentrada y omiten necesidades y aportes LGBTIQ+*; ¿cuando una mujer trans cuida a otras personas, “*¿quién la cuida a ella?*”

La política de financiamiento es un capítulo en sí mismo. Anderson introduce una nota de cautela diciendo que “*tal vez estamos sobredimensionando la crisis, pero tampoco quiero minimizar porque es real*” y llama a leer también el cambio en las reglas de acceso a los recursos, en donde se requiere: *más exigencia de resultados, inglés como idioma operativo, formularios y trazabilidad que dejan fuera a las organizaciones de base*. Taveras, replica que el golpe ya es visible y obliga a ensayar “*autosostenimiento*” y a “*identificar qué áreas del sector privado están dispuestas a trabajar con nosotras*”. Echeverri, rescata una oportunidad en la crisis y es salir de la “*zona de confort*” para reinsertar al sector privado en alianzas que combinen recursos y aprendizajes, midan resultados y hablen un lenguaje común de costo-efectividad social. Páramo, concluye que toca “*explorar nuevas fuentes*”, incluidas las empresariales y las filantropías locales o regionales que ya están sosteniendo procesos, y profesionalizar la gestión para no perder puertas por debilidades evitables.

En clave de la teoría política del movimiento, algunas personas interpelan al propio campo. “*Nos debemos un diálogo sincero*”, dice Páramo, para procesar disensos que hoy “*debilitan al movimiento*” y ubicar las diferencias como parte de una estrategia, no como líneas de fractura. “*La unión no puede ser coyuntural*”, refuerza Elena Pérez y dice que los pactos deben perdurar para resistir las oleadas conservadoras y traducir los compromisos internacionales en cumplimientos verificables. Castañeda, por su parte, plantea una agenda de fortalecimiento institucional en donde deben realizarse acciones para “*fortalecer las capacidades para la incidencia en la multilateralidad, hacer seguimiento y*



monitoreo de políticas y fortalecer el liderazgo interseccional como arquitectura mínima para operar en un entorno menos amigable”.

¿Dónde se abren entonces las oportunidades para la acción estratégica? Las conversaciones dibujan varias rutas convergentes:

FAME En la arena internacional, permanecer en los espacios aunque el acceso sea más costoso se vuelve un principio. “No bajar los brazos”, insiste Ferreyra, a la vez que propone (como lo están haciendo), “documentar las pérdidas por el financiamiento y capitalizar los pequeños triunfos” para sostener la legitimidad, contar con evidencia para la incidencia y la sostenibilidad.

FAME En el SIDH, la reconfiguración institucional no está cerrada, y varios países han “tomado la bandera de los derechos frente a los embates de la extrema derecha”.

FAME En la OIT, donde no siempre se reconoció un campo natural para los feminismos, Scampini y Pérez ven ventanas para afirmar el trabajo decente, la violencia y acoso (C190), y el cumplimiento efectivo de la C/189, apoyando la participación de las trabajadoras del hogar en la arena tripartita.

FAME En el nivel nacional y subnacional, se recomienda mapear, porque “el Estado no es monolítico y siempre habrá alguien con quien se puede seguir trabajando”, incluso si la puerta del ejecutivo está cerrada, algunos congresos, municipalidades y las cortes pueden ser nodos útiles en coyunturas adversas.

De estas voces se desprenden sugerencias política para FAME:

FAME Anclar el cuidado como política económica, no solamente social

FAME Medir y comunicar los resultados con la misma precisión con la que se defienden los principios

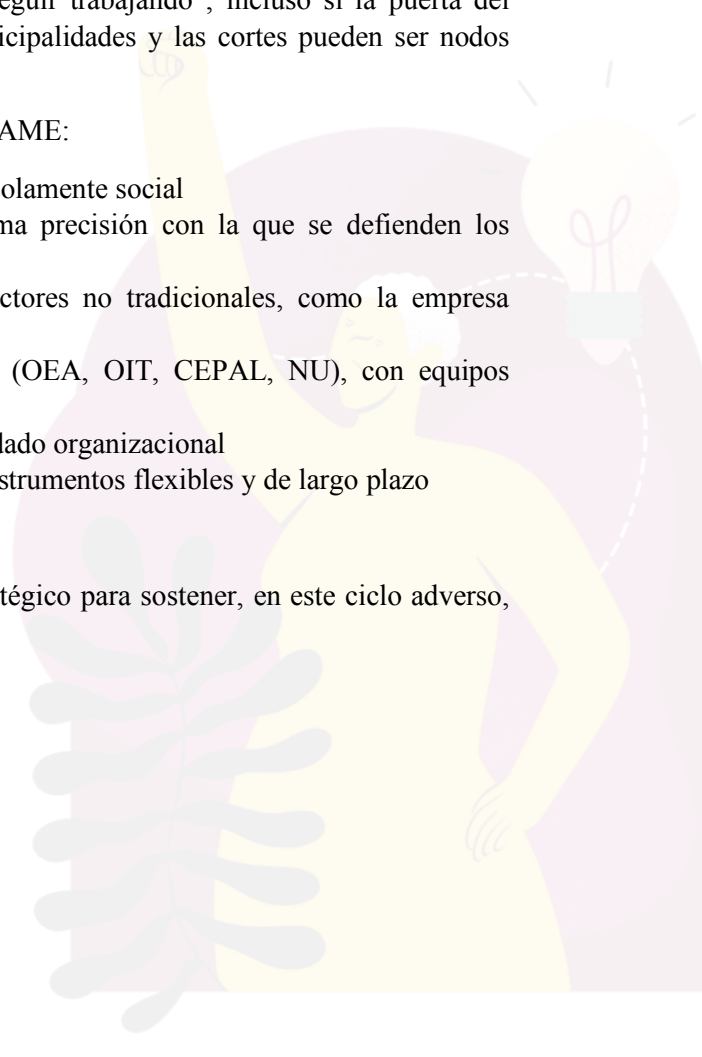
FAME Multiplicar las alianzas estables, incluyendo actores no tradicionales, como la empresa privada y la filantropía

FAME Sostener la presencia en la agenda multinivel (OEA, OIT, CEPAL, NU), con equipos preparados para la “mesa chica”

FAME Invertir en formación intergeneracional y en cuidado organizacional

FAME Diversificar las fuentes de financiamiento con instrumentos flexibles y de largo plazo

Lo anterior, no es plan de máximos, es un mínimo estratégico para sostener, en este ciclo adverso, una política feminista de la vida.



FAME: una concertación estratégica en tiempos de crisis

La agenda de los cuidados: posibilidades y oportunidades

La agenda de los cuidados ha cobrado visibilidad renovada en los últimos años, como estructura del desarrollo sostenible y de la igualdad de género. En la 68 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 68, marzo del año 2024), uno de los temas prioritarios giró en torno a la financiación de los sistemas de protección social y cuidados para el cumplimiento de los derechos humanos, la igualdad de género y la reducción de la pobreza. Allí se subrayó que la ausencia de la inversión pública suficiente en cuidados reproduce las desigualdades intergeneracionales y las estructuras de empobrecimiento en donde las mujeres absorben los costos invisibilizados de la reproducción social. En paralelo el CSW 69 en marzo 2025, intensificó las referencias formales a los cuidados en espacios tanto formales como informales, reconociendo su intersección con el cambio climático, el envejecimiento poblacional, las migraciones forzadas y acordando líneas de acción estratégicas para los próximos años (2025- 2030) dentro de la Alianza Global para los Cuidados²².

En América Latina y el Caribe, la XVI, Conferencia Regional de la Mujer realizada en Ciudad de México, en agosto del año 2025, reafirma al cuidado a través del Compromiso de Tlatelolco²³ como un componente central de las transformaciones necesarias y los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, para avanzar hacia la igualdad de género. El documento además señala, que la sociedad del cuidado debe conseguirse como un derecho, un bien público y una responsabilidad colectiva; y se acordó acelerar la creación de sistemas de cuidado infantil (en México), así como reforzar los servicios a personas mayores y la protección social con enfoque de género, dado el reconocimiento de que la responsabilidad desproporcionada del trabajo de los cuidados que recae sobre las mujeres limita la autonomía económica y reproduce las desigualdades estructurales.

El monitoreo global de la Agenda 2030, a través del Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés) del año 2025, iluminó los retrasos persistentes en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, vinculados directamente con los cuidados. En la sesión del año 2025, el HLPF revisó con mayor profundidad, los ODS 3 (salud), ODS 5 (igualdad de género), ODS 8 (trabajo decente), entre otros, subrayando que con cinco años para cumplir la agenda 2030 la ventana para una acción decisiva está cerrándose muy rápido. En el informe *Latin American and Caribbean in the Final Five Years of the 2030 agenda*, presentado por la CEPAL al HLPF²⁴, se advierte que muchas metas relacionadas con la protección social, la reducción de las desigualdades y el trabajo digno requieren aceleradores políticos urgentes, sobre todo la expansión de políticas de cuidado que permitan descongestionar las cargas del trabajo no remunerado que pesa principalmente sobre las mujeres.

Conceptualmente, organismos como la CEPAL en su publicación, *La sociedad del cuidado, gobernanza económica, política y diálogo social para una transformación de igualdad de género*

²² Recuperado en: https://globalallianceforcare.org/images/recursos/1265/La-Agenda-de-Cuidados-en-CSW69_Beijing30.pdf?utm_source=chatgpt.com

²³ Compromiso de Tlatelolco. Recuperado en: https://conferenciamujer.cepal.org/16/sites/crm16/files/2500331s_crm.16_compromiso_tlatelolco.pdf

²⁴ Recuperado en: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2ec84327-b924-4351-a2f1-65eb9f53285a/content>



(agosto 2025²⁵), plantea los cuidados como necesidad, derecho de trabajo y dinamizador de la economía. En dicho documento se hace un diagnóstico claro, cuando afirma que la crisis de los cuidados, agravada por el envejecimiento, los efectos climáticos, las migraciones internas, externas, supera en muchos países latinoamericanos y del Caribe la capacidad institucional existente.

La realidad cuantitativa acompaña ese reconocimiento, cuando Ana Gúezmes, directora de los Asuntos de género de la CEPAL, en América Latina un 68% de las mujeres entre los 15 y 24 años que no estudian ni están activas en el mercado laboral, están impedidas en buena medida por las tareas de cuidados no remunerados, tasa que tiene un relato muy inferior en los hombres jóvenes. Se ha estimado que para que los estándares internacionales de cuidado infantil, la atención a personas mayores y la protección social sean cubiertos adecuadamente, los países de la región necesitan invertir aproximadamente un 4,7% del PIB anual para el año 2035. Esa inversión permitirá la creación de unos 31 millones de empleos y aumentar la participación laboral femenina significativamente, contribuyendo además a mejores ingresos fiscales y bienestar social.

Los obstáculos en la agenda de cuidados persisten y entre algunos, son:

FAME Primero, la restricción fiscal, representada en altos niveles de deuda soberana, inflación y competencia presupuestaria con gasto militar, seguridad y defensa hacen que los Estados tengan márgenes reducidos para asumir las inversiones en cuidados

FAME Segundo, una institucionalidad desigual, es decir, pocos países cuentan con normativas robustas que reconozcan los cuidados como trabajo remunerado digno, licencias, protección social, estándares laborales decentes, y menos aún que estos estándares se cumplan en territorios rurales o indígenas

FAME Tercero, las tensiones ideológicas y políticas como la cruzada antigénero (mencionadas en capítulos anteriores), opera como una fuerza de resistencia que rechaza en parte la agenda de los cuidados o la vacía de contenidos, negando los derechos sexuales, los derechos reproductivos o posicionando el cuidado como funciones exclusivamente privada.

FAME Cuarto, las crisis ambientales, climáticas y migratorias que amplían las necesidades de cuidado de modo no lineal, empujando sobrecargar los hogares que ya operan al límite.

Pesa eso obstáculos, se abren oportunidades estratégicas:

FAME Los compromisos regionales de CEPAL, los marcos multilaterales como la CSW y el HLPF, han elevado la agenda de los cuidados a nivel diplomático institucional

FAME Existe una convergencia creciente entre las políticas de protección social, trabajo decente y cuidados

FAME La evidencia técnica está más abundante (diagnósticos nacionales, evaluaciones de impacto institucionales), evidencia que es fundamental para la incidencia política argumentativa

FAME Movimientos feministas y sindicales han profundizado su incidencia en foros académicos, políticos y en organismos internacionales para reclamar financiamiento directo, estándares

²⁵ Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/dd048d66-3216-4dbc-a86e-a006c2ac7385/content>

laborales y derechos. El reconocimiento explícito de los cuidados como parte del Compromiso de Financiamiento en Sevilla, forma parte de este giro político.

Para que esta propuesta se traduzca en transformaciones reales, deben alinearse varios elementos:

- FAME** Sistemas de datos con perspectiva de género para medir el tiempo de cuidados no remunerados
- FAME** Presupuestos nacionales con marcadores de género que asignen recursos estables y plurianuales
- FAME** Normativas laborales que formalicen el trabajo del cuidado remunerado, incluyan prestaciones sociales, seguridad, social, condiciones, decentes
- FAME** Inversión pública en infraestructura de cuidado, como guarderías, servicios para personas mayores y cuidados comunitarios, especialmente en zona rurales o remotas
- FAME** Construcción de alianzas político-sociales entre los gobiernos, los movimientos feministas, los sindicatos, la academia, los donantes y la cooperación internacional que garanticen que las agendas no sean captadas o vaciadas de contenido.

En conclusión, la agenda de los cuidados en el contexto global y regional se vuelve un termómetro clave del tipo de sociedades que se está construyendo en ese periodo de permacrisis. Que la conversación no sólo reconozca la importancia del cuidado, sino que lo ubique como núcleo estratégico de las políticas de la igualdad, la justicia social y la gobernanza democrática y enlace directamente con los otros grandes bloques del contexto que atraviesa en este documento: la polarización ideológica, los reordenamientos políticos, las tensiones del financiamiento para el desarrollo y las ofensivas antigénero. Si no se apuesta a los cuidados con ambición técnica y política, los avances en derechos de género, LGBTIQ+, participación y justicia social, correrán el riesgo de ser funcionales sólo al relato, pero frágiles frente al recorte, la crisis fiscal y la volatilidad global.

Obstáculos y oportunidades de la incidencia política feminista de FAME

Temáticas	Obstáculos	Oportunidades
Cuidados	Riesgo de despolitización del cuidado al reducirlo a un catálogo de servicios privatizados. Insuficiente presupuesto público y retrocesos en políticas sociales por priorización del gasto en seguridad. Avance de las agendas anti género que buscan eliminar referencias a cuidados en políticas internacionales y nacionales. Fragmentación de los movimientos y sobrecarga de liderazgos femeninos sin condiciones adecuadas de autocuidado.	Creciente reconocimiento internacional del cuidado como un derecho humano y bien público (OC 31/25 Corte - IDH). Incidencia feminista que ha posicionado la 'sociedad del cuidado' como horizonte de la política pública. Posibilidad de articular cuidados con trabajo decente, protección social y justicia climática. Alianzas con sindicatos, juventudes y movimientos sociales que amplifican la demanda. Oportunidad de construir agendas interseccionales que vinculen cuidados con

	Debilidad institucional de mecanismos de igualdad en varios países de la región.	igualdad de género, sostenibilidad ambiental y derechos laborales.
Justicia climática	Extractivismo y expansión de proyectos de transición energética que vulneran los derechos de comunidades. Violencias y criminalización contra defensoras ambientales y territoriales. Limitada participación de las organizaciones feministas y redes en fondos climáticos globales y nacionales. Riesgo de cooptación de los discursos verdes sin transformaciones estructurales. Escasa articulación entre las agendas de justicia climática y justicia económica.	Mayor centralidad de la justicia climática en la agenda internacional (COP, OC- Corte IDH, Fondo de Pérdidas y Daños). Oportunidad de vincular las agendas feministas y de mujeres con la transición energética justa. Disponibilidad de financiamiento climático que puede ser condicionado a metas de género y cuidados. Alianzas con movimientos ambientalistas, indígenas y comunitarios fortalecen incidencia. Reconocimiento creciente del rol de las mujeres como defensoras ambientales y territoriales.
Derechos económicos	Crisis estructural de la cooperación internacional: salida/reducción de USAID, cooperación nórdica y europea. Aumento de financiamiento condicionado a agendas de seguridad y control migratorio. Precarización laboral, informalidad y feminización de la pobreza. Competencia y fragmentación entre organizaciones y redes por recursos limitados. Riesgo de que la filantropía corporativa privilegie innovación tecnológica y visibilidad sobre agendas feministas transformadoras.	Reconocimiento global de la necesidad de financiamiento para la igualdad (Compromiso de Sevilla 2025). Apertura de debates sobre fiscalidad internacional con posibilidad de incluir metas de género. Expansión de economías solidarias, cooperativas y comunitarias lideradas por mujeres. Potencial de incidencia en organismos multilaterales (CEPAL, OIT, ONU Mujeres). Posibilidad de articular justicia económica con cuidados y transición ecológica inclusiva.

Los obstáculos tienen densidad material y simbólica. Hay constricciones de seguridad que van desde la exposición de los liderazgos hasta la desprotección de los mismos frente a las fuerzas públicas que, en no pocos relatos, son percibidas como amenazas. Hay precariedad financiera que obliga a sostener las agendas con los recursos propios, interrumpir procesos sociales y políticos vitales para las mujeres, competir entre pares por recursos y subordinar tiempos políticos a calendarios de convocatorias de los donantes

Hay un asedio cultural que instala el anti-género como sentido común, impone la sospecha y trivializa la palabra “derechos”, a la par que coloniza el lenguaje institucional para vaciarlo de contenido transformador. Hay cierres administrativos y legales que penalizan el acceso a los fondos, desincentiva la investigación y convierten la administración de los recursos en un laberinto sin salida. Hay brechas tecnológicas y geográficas que dificultan la circulación de la información y la



participación equitativa para acceder al financiamiento. Hay, por último, un desgaste psicosocial que se expresa como un cansancio de los activismos, la auto exigencia sin sostén y un duelo acumulado, que requiere, como lo vimos anteriormente, de acciones urgentes de autocuidado.

Pero en el mismo territorio brotan las oportunidades:

FAME La primera es la persistencia de un capital organizativo que se niega a confundir *retroceso con rendición*. Allí donde se retiran las agencias de cooperación o se clausuran oficinas, aparecen las cooperaciones inesperadas, las alianzas horizontales y las economías solidarias; allí donde se desfinancia la política pública se abren espacios de co-diseño con congresistas receptivos o con gobiernos locales que requieren soluciones a problemáticas concretas relacionadas con las mujeres y sus derechos humanos; allí donde se bloquean las consignas se reconstruyen los argumentos pedagógicos capaces de convencer, conmover y organizar.

FAME La segunda oportunidad es la agenda de los cuidados, no como “tema” sino como teoría de cambio que integra *seguridad, economía, tiempo, salud y trabajo*; una agenda que permite recomponer las mayorías sociales, anudar las reivindicaciones de clase y de género y proponer pactos birregionales que, al ser exigibles, reubican a los feminismos en el centro de la discusión sobre modelo de la sociedad.

FAME La tercera es el *conocimiento feminista* como una infraestructura de la incidencia política que se materializa en las metodologías de escucha, encuestas, litigios, guiones audiovisuales, manuales y protocolos que, si se comparten y se adaptan, se convierten en estrategias multiplicadoras con la capacidad de mantener las apuestas por la transformación de los idearios patriarcales y misóginos. La sistematización del conocimiento feminista se ve como una oportunidad la evidencia de la incidencia política.

FAME La cuarta es la *creatividad institucional* para administrar fondos de modo horizontal y democrática, sorteando los cercos legales sin renunciar a la rendición de cuentas, y la imaginación estratégica para diversificar los ingresos sin convertir la incidencia en un servicio despolitizado.

FAME La quinta es la *potencia del lenguaje* cuando se hace claro, situado y honesto, que traduzca tecnicismos y explique sin condescendencia puede construir relatos que invitan a sumarse a las luchas.

FAME La sexta y crucial, es *el cuidado como política organizativa* para que los equipos que se sostienen inciden mejor, por más tiempo y con menos daños a la salud integral.

Desde estas claves, al reflexionar, *¿cómo entienden y practican las organizaciones y Redes regionales de FAME la incidencia política multinivel?*, en términos operativos, la conciben como un entrelazamiento de cuatro planos que se alimentan recíprocamente:

FAME En el plano *comunitario territorial*, la incidencia es la escucha situada, la pedagogía política, la resolución de los problemas inmediatos, la construcción de la legitimidad ética y técnica, y el ensamblaje de evidencias que prueban lo que pasa cuando los derechos se niegan.



FAME En el plano *municipal y provincial*, en diálogo con las autoridades, es la participación significativa en la definición de los presupuestos al género, es la vigilancia de los servicios con enfoque interseccional, es la negociación de medidas de seguridad y cuidados, y es la producción de normativa sub-nacional que abre camino a la incidencia en otros ámbitos.

FAME En el *plano nacional*, es acompañamiento legislativo, litigio estratégico, es presencia en medios, es el afinamiento de la veeduría feminista y la disputa por la arquitectura institucional que garantiza o bloquea la igualdad.

FAME En el *plano regional y global*, es articulación en redes, posicionamiento en foros multilaterales, uso creativo de los estándares internacionales para respaldar las exigencias internas, y la circulación intergeneracional de las experiencias que permiten recrear las estrategias cuando el local se cierra.

Esta arquitectura propuesta no opera como escalera secuencial, sino como entramado circular, porque cuando en un país se clausura un canal, la red subregional ofrece otra puerta, cuando un argumento jurídico se traba, una evidencia narrativa o audiovisual abre fisuras, cuando un territorio es demasiado riesgoso, una estación de cuidado y respiro permite sostener el pulso hasta que la ventana se reabra.

A los obstáculos y las oportunidades se suman las *preocupaciones estratégicas*, como el riesgo de despolitizar la agenda de cuidados y convertirla en catálogo de servicios privatizados. La advertencia es doble. Por un lado, si el cuidado se traduce únicamente a instrumentos legales sin mecanismos materiales de implementación, la incidencia pierde eficacia y credibilidad. Por otro lado, si se lo evacúa del campo de lo público, se priva a la sociedad de un bien común que debe ser garantizado por el Estado con la participación social. La apuesta de las organizaciones de FAME es construir una “*sociedad de los cuidados*” como proyecto político que anude el trabajo digno, tiempo, ingresos, salud, seguridad y sostenibilidad ambiental, y que convoque a los sindicatos, los movimientos territoriales, a las juventudes y a las organizaciones de mujeres y feministas a deliberar qué Estado, qué economía y qué vida se desea.

Un aprendizaje organizativo que atraviesa a las organizaciones y a las Redes regionales es que *competir por recursos no puede traducirse en fragmentación estratégica*. La reducción y la desaparición de la cooperación y la proliferación de convocatorias tecnocráticas generan dinámicas de competencia que erosionan las confianzas y duplican los esfuerzos. Las organizaciones de FAME proponen revertir ese efecto mediante la especialización colaborativa, que significa no ir todas al mismo lugar, diferenciar las líneas por capacidades y experiencias, unirse para el diseño de propuestas inter-organizacionales, la circulación abierta de herramientas y metodologías para cualificar la elaboración técnica, y construir acuerdos de vocerías que eviten la sobreexposición de unas y la invisibilización de otras. La articulación, para funcionar, requiere tiempo y una ética de reciprocidad que se base en que “*quien tenga más, que ayude*” y que “*quien se abre camino, lleve a otra consigo*”.

La conclusión provisional es que la incidencia política multinivel que el FAME encarna se entiende como práctica de sostener la vida en tiempos de amenazas múltiples y de disputar, simultáneamente, sentidos, normas y recursos. Su fuerza radica en la capacidad de convertir las experiencias situadas en argumentos públicos, de transformar el cuidado en política, de hacer de la escucha un método de diseño, de anudar escalas y de reconocer en la diversidad una fuente de potencia política.

Allí donde el autoritarismo busca aislar, la incidencia feminista teje, donde la precariedad desalienta, la incidencia feminista organiza, donde la comunicación hegemónica simplifica para excluir, la incidencia feminista explica para incluir, donde la cooperación se retrae, la incidencia feminista inventa sostenibilidad y comparte herramientas. Esa es la llave que, pese a los obstáculos severos, mantiene abierta la posibilidad de avanzar, es una ética y una estrategia que confían en la capacidad de las mujeres, sus organizaciones y sus Redes regionales para hacer de la política un terreno habitable, y del cuidado, una arquitectura de futuro.



FAME

FEMINISMO: ACCIONES Y MOVILIZACIÓN
PARA UNA ECONOMÍA INCLUSIVA



CONACTRAHO

Confederación Latinoamericana y del
Caribe de Trabajadoras del Hogar



care®

France 



AFD
AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

Semáforo regional de derechos y cuidados: evidencias para la acción de FAME.

Convenciones:

Amarillo: en peligro de retroceder o perderse

Verde: Se mantiene el derecho

Rojo: En retroceso y peligro de desaparecer

Negro: Desapareció el derecho

País	Espacio cívico	SSRSalud sexual y salud reproductiva	Derechos LGBTQIA+	Políticas de cuidado
Argentina	En peligro	En peligro	Se mantiene	En peligro
Bolivia	En peligro	En peligro	En peligro	En peligro
Brasil	En peligro	En peligro	Se mantiene	Se mantiene
Chile	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene
Colombia	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene
Ecuador	Retrocede	En peligro	En peligro	En peligro
Guyana	En peligro	Se mantiene	En peligro	En peligro
Paraguay	En peligro	Retrocede	Retrocede	Retrocede
Perú	Retrocede	En peligro	En peligro	En peligro
Surinam	En peligro	En peligro	En peligro	En peligro
Uruguay	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene
Venezuela	Desapareció	En peligro	En peligro	En peligro
México	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene
Belice	En peligro	En peligro	Se mantiene	En peligro
Costa Rica	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene
El Salvador	Desapareció	Desapareció	En peligro	En peligro
Guatemala	En peligro	Desapareció	Desapareció	En peligro
Honduras	Retrocede	Desapareció	En peligro	En peligro
Nicaragua	Desapareció	Desapareció	En peligro	En peligro
Panamá	En peligro	En peligro	En peligro	En peligro
Antigua y Barbuda	En peligro	En peligro	Se mantiene	En peligro
Bahamas	En peligro	En peligro	Se mantiene	En peligro
Barbados	En peligro	En peligro	Se mantiene	En peligro
Cuba	Desapareció	Se mantiene	Se mantiene	En peligro
Dominica	En peligro	En peligro	Se mantiene	En peligro
República Dominicana	En peligro	Desapareció	En peligro	En peligro
Granada	En peligro	En peligro	Retrocede	En peligro
Haití	Desapareció	En peligro	En peligro	En peligro
Jamaica	En peligro	En peligro	Retrocede	En peligro
San Cristóbal y Nieves	En peligro	En peligro	Se mantiene	En peligro

Santa Lucía	☐ En peligro	☐ En peligro	☐ Se mantiene	☐ En peligro
San Vicente y las Granadinas	☐ En peligro	☐ En peligro	☒ Retrocede	☐ En peligro
Trinidad y Tobago	☐ En peligro	☐ En peligro	☐ En peligro	☐ En peligro

Elaboración propia: FAME